CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE FEDERICO DE CARVAJAL PEREZ

Sesión Plenaria núm. 78

celebrada el jueves, 19 de julio de 1984

ORDEN DEL DIA

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación):

— **De la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de Ley sobre ordenación del seguro privado («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 137, de 18 de julio de 1984).**

SUMARIO

<i>Se reanuda la sesión a las diez y treinta de la mañana.</i>		<i>rradas, Zavala Alcibar-Jáuregui, Sierra Herrera y Ruiz Mendoza.</i>
	Página	<i>Se aprueba el preámbulo.</i>
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados (continuación)	3955	<i>El señor Oliveras i Terradas defiende los votos particulares del Grupo de Cataluña al Senado. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza.</i>
	Página	<i>Se rechazan las enmiendas del Grupo de Cataluña al Senado al artículo 1.º, números 17, 18 y 19.</i>
De la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de Ley sobre ordenación del seguro privado	3955	<i>Se aprueba el texto del dictamen de la Comisión.</i>
<i>El señor Martínez Bjorkman presenta el dictamen. El señor Ruiz Mendoza interviene en turno a favor. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Arias Cañete. En turno de portavoces intervienen los señores Oliveras i Te-</i>		<i>El señor Arias Cañete defiende dos votos particulares a los artículos 2.º y 3.º Seguidamente hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza sobre una enmienda transaccional.</i>
		<i>Se aprueban los artículos 4.º, 5.º y 6.º</i>
		<i>Se rechaza la enmienda 23.</i>
		<i>Se aprueba el artículo 7.º</i>
		<i>Se aprueban los artículos 8.º y 9.º</i>

- El señor Arias Cañete defiende las enmiendas 55, 56, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 88 y 89. Para turno en contra interviene el señor Ruiz Mendoza. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Arias Cañete y Ruiz Mendoza.*
- Se rechazan las dos enmiendas del Grupo Popular al artículo 10.*
- Se rechaza una enmienda del Grupo Cataluña al Senado al mismo artículo.*
- Se aprueba el texto del dictamen del artículo 10.*
- Se aprueba el texto del artículo 11.*
- El señor De la Sierra Herrera retira la enmienda 98, y defiende las enmiendas 58, 61, 62, 65 y 91 al artículo 12. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza. En turno de portavoces intervienen los señores Sierra Herrera y Ruiz Mendoza.*
- Se rechaza la enmienda 58.*
- Se rechaza la enmienda 25.*
- Se aprueba el texto del dictamen del artículo 12.*
- Se aprueban unas enmiendas transaccionales.*
- Se aprueban los artículos 2.º y 3.º del texto del dictamen, con la modificación de las enmiendas transaccionales.*
- El señor Zavala Alcibar-Jáuregui defiende todas las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, excepto la 111 y 119, retiradas. Para turno en contra interviene el señor Ruiz Mendoza.*
- Se rechazan, separadamente, las enmiendas 61 y 103.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechaza la enmienda 62, del Grupo Popular, al artículo 14.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueba el artículo 15.*
- Se rechazan las enmiendas del Grupo de Cataluña al Senado al artículo 16.*
- Se rechazan los votos particulares del Grupo de Senadores Nacionalista Vascos.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechazan las enmiendas 29, 30 y 31, del Grupo de Cataluña al Senado.*
- Se rechazan las enmiendas 110 y 111, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechazan, por separado, las enmiendas 32, 33 y 112. Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechaza la enmienda 19 al artículo 19.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechazan, por separado, las enmiendas 34, 35, 20 y 115.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechazan las enmiendas 36 y 37.*
- Se aprueba el texto del dictamen del artículo 21.*
- Se rechaza, separadamente, la enmienda 65 y la enmienda 38.*
- Se aprueba el texto del dictamen del artículo 22.*
- Se rechazan las enmiendas 39 y 40.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueba el artículo 24.*
- Se rechazan las enmiendas 69 y 70 al artículo 24. Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechazan, por separado, las enmiendas 117, 120 y 71. Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban los artículos 28, 29 y 30.*
- Se rechaza la enmienda 121 al artículo 31.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban los artículos 32, 33, 34, 35 y 36.*
- Se rechaza la enmienda 75 al artículo 37.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechazan las enmiendas 76, 77 y 78 al artículo 38.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechazan las enmiendas 41 y 42 y, separadamente, las enmiendas 122 y 123.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban los artículos 40, 41, 42 y 43.*
- Se rechaza la enmienda número 43.*
- Se aprueba el texto del dictamen del artículo 44.*
- Se aprueba el artículo 45.*
- Se aprueba el artículo 46.*
- Se rechaza, por separado, la enmienda 44 y la enmienda 45.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban los artículos 48 y 49.*
- Se rechaza la enmienda 124.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban las disposiciones finales segunda y tercera.*
- Se rechaza, separadamente, la enmienda 46, así como la 125.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se rechaza la enmienda 47, a la Disposición final quinta.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban las Disposiciones finales sexta, séptima y octava.*
- Se rechaza la enmienda 48, de adición.*
- Se rechaza la enmienda 88, de adición.*
- Se rechazan, por separado, las enmiendas 50 y 89 a la Disposición transitoria primera.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban las Disposiciones transitorias segunda y tercera.*
- Se rechaza la enmienda 91 a la Disposición transitoria cuarta.*
- Se aprueba el texto del dictamen.*
- Se aprueban las Disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava y las Disposiciones adicionales primera y segunda.*
- El señor Bajo Fanlo defiende las enmiendas 131, 132, 128, 129 y 130 a la Disposición adicional tercera. Para turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz Mendoza. En*

turno de portavoces interviene el señor Bajo Fanlo. El señor Secretario (Gaminde Alix) da lectura de una enmienda transaccional.

Se aprueba el párrafo primero de la Disposición adicional tercera.

Se aprueba la enmienda leída por el señor Secretario.

Se aprueba la enmienda 128, que propone la adición de un apartado.

Se rechaza la enmienda número 49.

Se aprueba el texto del dictamen.

Se aprueba la Disposición derogatoria.

El señor Secretario (Gaminde Alix) da lectura de una enmienda transaccional.

Se aprueba.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cuarenta de la tarde.

Se reanuda la sesión a las diez y treinta de la mañana.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Señores Senadores, se reanuda la sesión.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación)

— DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE ORDENACION DEL SEGURO PRIVADO

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de Ley sobre ordenación del seguro privado.

El señor Presidente de la Comisión de Justicia: ¿Quién va a hacer la presentación del dictamen?

El señor MARTINEZ BJORKMAN: Señor Presidente, ante la ausencia del Presidente de la Comisión de Justicia tengo que decir que he sido designado por la Comisión y que, por tanto, seré yo quien presente el dictamen.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene S. S. la palabra para hacer la exposición del dictamen.

El señor MARTINEZ BJORKMAN: Señor Presidente, señorías, por designación de la Comisión de Justicia me presento ante ustedes para presentar el dictamen del proyecto de Ley sobre ordenación del seguro privado.

Me voy a limitar a un comentario de lo que es el texto que ha sido elaborado con el carácter de preámbulo por la Comisión, y que, en cierto modo, recoge lo que ya

venía del Congreso de los Diputados. Y digo que me voy a limitar a ello, porque creo que es ilustrativo para la Cámara que se haga un comentario que subraye aquellos puntos más destacados del proyecto de Ley que va a ordenar un sector importantísimo de la vida económica y financiera del país.

La legislación reguladora del seguro privado está ordenada sobre la base de normas de Derecho Privado y normas de Derecho Público, y lo característico de este segundo ámbito jurídico es que tiene como misión tutelar, en favor de los asegurados y beneficiarios del seguro, toda una serie de cuestiones que afectan a esta especialidad de la vida jurídica de los ciudadanos españoles. Y ello es tal por un principio básico: en todo seguro hay un cambio de prestación presente por otra prestación posible y futura. De aquí la existencia de un interés público destinado a que tenga efectividad tal prestación cuando eventualmente se produzca el siniestro; de ello, que la institución del seguro privado haya estado siempre sujeta a una vigilancia oficial tendente a comprobar que las empresas que se dedican al seguro, que mantienen la contratación con los asegurados, cuenten con una situación de solvencia suficiente para cumplir su objeto social. Y este control social, este control que se ejerce a través del Estado, tiene lugar mediante un conjunto de acciones administrativas que están dirigidas a los tres momentos fundamentales de la contratación y que son las siguientes: primero, hay una serie de requisitos financieros precisos para concurrir al mercado del seguro. Este es el principio fundamental de control y que siempre ha sido sostenido por todos los teóricos y por todas las legislaciones correspondientes a la regulación de esta contratación.

Segundo, dar las normas de orden jurídico, financiero y técnico, que deben seguir las empresas durante la regulación en su actuar en el mundo y en el mercado del seguro.

Por último, hay que definir las circunstancias y situaciones determinantes de la salida del mercado de aquellas entidades aseguradoras cuando carecen de las condiciones mínimas de solvencia.

Estas son las consideraciones que pudiéramos llamar generales, consideraciones que están en cualquier texto jurídico, en cualquier manual jurídico, que se refiera a esta materia.

Sin embargo, con relación al mundo en que nos desenvolvemos y en que se desenvuelve el Estado español, es decir, el mundo occidental, estamos sobre la base fundamental de que este sistema de control para ser eficaz es necesario que se precise y que se concrete en cada momento histórico y en cada circunstancia económica, social y financiera.

La legislación española al respecto, sin producirse antecedentes muy anteriores a nuestro siglo XX, arranca de la Ley de 14 de mayo de 1908, que es la que inicia esta ordenación del seguro privado y que, sencillamente, se basa en el control previo, que era fundamental, como digo, en la institución, pero que tiene un escaso desarrollo. Por ello, posteriormente, cuando las circunstancias

económicas y sociales del país adquieren una mayor complejidad, es cuando aparece la Ley de 16 de diciembre de 1954, que, con una serie de normas complementarias, muy prolijas, ha sido la norma que se ha mantenido vigente hasta el momento. En ella se sigue el principio normal de esta situación de centrar todo en el control previo, pero tuvo una regulación un tanto desigual, producto de la situación del desarrollo económico del país en estos años, que realmente la hacía totalmente inservible, tanto a nivel de análisis teórico, como a nivel de análisis histórico, en la situación actual.

Por ello hace falta una nueva regulación, que es la que viene a cubrir este proyecto de Ley, que tendrá sus consecuencias después de su aprobación en esta Cámara.

Hacia falta porque, por una parte, se requería una nueva concepción del control de solvencia de las empresas del seguro y, por otra, porque se están produciendo situaciones internacionales que van a afectar en sumo grado a la situación española; es decir, que, frente a la existencia de nuevas necesidades de coberturas de riesgos y a las innovaciones en el campo del seguro, sobre todo en las áreas internacionales, lo más importante es la posible adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, y por ello hace falta que se oriente la unidad del mercado del seguro para que se ofrezcan unas circunstancias distintas en la regulación española de nuestra legislación, porque estas circunstancias internacionales lo hacen hoy absolutamente necesario.

Como toda norma jurídica tenemos que tener en cuenta que es necesario señalar tanto su finalidad como los instrumentos idóneos para resolver los problemas que la propia norma quiere abordar, y esto es lo que hay que analizar en la Ley que hoy se presenta ante SS. SS. Se ha hecho sobre la base de ofrecer una ordenación del mercado de seguros, en general, punto primero, y un control de las empresas aseguradoras, en concreto, como punto segundo.

Vamos a hacer un previo análisis, siguiendo, como he dicho anteriormente, la pauta que nos va marcando el preámbulo elaborado por la Comisión, de acuerdo con los trabajos previos del Congreso de los Diputados.

En cuanto a este primer punto, que se refiere a la ordenación del mercado de seguros en general, tenemos que señalar los siguientes apartados y puntos de reflexión. Lo primero que pretende alcanzar la Ley es la normalización del mercado, dando a todas las entidades aseguradoras la posibilidad de participar en el mismo, pero con una absoluta igualdad de concurrencia y sin tratamientos legales discriminatorios. En este sentido se ha incluido en la nueva regulación a las entidades de previsión social que estaban acogidas a la Ley de 6 de diciembre de 1941, y ello con el fin de someterlas al mismo control de solvencia que a las restantes entidades aseguradoras y, por tanto, suprimiendo distinta jurisdicciones administrativas que se podían referir y se referían a este campo del seguro.

Pero, de otra parte, era necesario mantener las características técnicas y sociales de tales entidades, por lo que también se han tenido presente tales circunstancias, y

ello con un carácter de que, a veces, por las distintas Comunidades Autónomas, y en virtud de sus competencias, habían intervenido sobre estas situaciones. Ello se ha tenido también presente y será motivo de reflexión y de debate, incluso, por SS. SS., desde los distintos puntos de vista, que ya se han tenido en cuenta tanto en Ponencia como en Comisión.

Sería conveniente, a veces, en la presentación de estos proyectos, traer al conocimiento de la Cámara ciertas circunstancias que concurren tanto en la Ponencia, como en la Comisión, y digo que sería un significado importante antropológico para el conocimiento real de cómo se van produciendo las Leyes en el país.

En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que es necesario la concentración de empresas y la reestructuración del sector, y ello porque es necesario hacerlo más competitivo en el campo nacional e internacional y con los menores costes de gestión.

En tercer lugar, potenciar el mercado nacional de reaseguros para aprovechar al máximo el pleno nacional de retención.

Otro punto será lograr una mayor especialización de las entidades aseguradoras, sobre todo en el ramo de vida, de acuerdo con las tendencias actuales en la materia, en el campo internacional. Y, por último, clarificar el régimen referente a las normas jurídicas de las empresas aseguradoras, y por ello se ha ordenado la estructura de las mutualidades, que estaban insuficientemente reguladas, y se ha dado entrada a la figura jurídica de la sociedad cooperativa de seguros.

Hay que señalar, con carácter especial e importante, que esta Ley se encuentra regulada de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª 11.ª y 13.ª de la Constitución, porque se ha de tener en cuenta la ordenación de las bases de seguros.

Perdón, señor Presidente, me va a permitir un brevisimo...

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muy breve porque su interpretación en la exposición de los motivos inspiradores del dictamen ha sido muy extensa, y la Presidencia ha sido muy benévola dada su extensión. Tenga la amabilidad de terminar.

El señor MARTINEZ BJORKMAN: En un par de minutos se ultima esta exposición. Era la importancia del tema, de la Ley, lo que me ha llevado a una exposición lenta, tranquila, reposada y meditada de esta exposición de motivos, que consideramos que era importantísimo que la conocieran SS. SS. en la mañana de hoy. Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones de la Presidencia sobre la regulación del debate, simplemente quiero señalar que, como SS. SS. tienen el texto en su poder, podrán referirse en todo momento a él. Pero hay que tener en cuenta y concretar que la Ley que hoy presentamos va a tener una especial importancia no solamente en la hora nacional, sino también en la hora internacional de España, y que, por tanto, el debate de esta mañana es un debate esencial para lo que pueden signifi-

car los futuros momentos de la economía española, donde la regulación del campo del seguro va a ser fundamental.

Nada más, señorías, y con la venia del señor Presidente me retiro.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Muchas gracias, Senador Martínez Bjorkman.

¿Turno a favor para el debate de totalidad? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia del señor Presidente. Señoras y señores Senadores, en estas vísperas vacacionales traer al conocimiento de SS. SS. una Ley sobre los seguros privados puede ser un poco árido, porque, evidentemente, la mayoría de nosotros estamos ya un poco cansados de sesiones, en razón a la cantidad de proyectos de Ley que la Cámara ha conocido, y también por la temperaturas del medio ambiente. No obstante, señorías, quiero señalar la importancia extrema de esta Ley que sometemos al debate de la Cámara.

En la sesión inicial de anteayer por la tarde se comenzó ya diciendo que nos encontrábamos en presencia de una buena Ley, y cuando se siguió con el debate sobre la Gerencia de infraestructura de la Defensa se siguió hablando también de que era otra buena Ley.

Me permito ahora decir a SS. SS. que esta Ley de Seguros Privados es una buena Ley. No voy en modo alguno a cometer la avilantez de decir lo que es el seguro, porque a todos consta lo que es el seguro; unos, con una formación civilista, y otro, con una formación mercantilista, pero a todas SS. SS. les consta la importancia de lo que es el seguro y la finalidad del mismo.

Ya de antiguo, de muy antiguo, en nuestro país, España, siguiendo los modelos de las ciudades hanseáticas y, prácticamente, en nuestro primer «Llibre de Consulat de Mar», de mil cuatrocientos y pico, se trató del seguro marítimo. Pero no solamente ya en ese «Llibre de Consulat de Mar», sino que muchas regiones españolas —Salamanca una de ellas, Navarra y Aragón— conocían también una forma de aseguramiento, que era el mutualismo en la ganadería. No les voy a hablar a ustedes del mutualismo de los ganaderos, pero lo digo únicamente como un antecedente a los fines de esta Ley de Seguros Privados, y por eso creo que debía hacer mención de ello.

Nuestro país, la España moderna, en 1908 ya establece la primera Ley de Seguros, una Ley de controles. Ya, entonces, en 1908, el Estado controlaba algo. Pasó su período, pasó todo nuestro período de Guerra civil, y en 1954 se ordena una Ley, que es hasta el momento la que ha venido siendo y aún es vigente. Pero, curiosidad del caso, esta Ley de 1954 se basaba en un Reglamento nada menos que del año 1912, es decir, que nuestros legisladores de la época, de primeros de siglo, eran magníficos legisladores que reflexionaban mucho el campo de los preceptos legales; la prueba de ello es que ahí está ese Reglamento rigiendo un montón de años.

Pues bien, ha llegado el momento, señorías, de que la

nueva situación económica y política del país ha obligado a dictaminar, a legislar, en materia del seguro privado. La importancia de todo esto, señorías, es sensacional, porque, si hay algo de motor en la economía que impulse a ésta, evidentemente el campo del seguro es importantísimo como elemento motor. La prueba de ello es que entre los distintos Ministerios existe un forcejeo para ver quién domina o quién influye en el campo asegurador: Ministerio de Trabajo, por una parte, los problemas de previsión, y Ministerio de Economía y Hacienda, por otra parte.

Pues bien, siendo consecuente con lo que ordena nuestra Constitución, el Gobierno actual, al que apoya nuestro Grupo Socialista, ha estimado necesario el ir a una regulación, ya por Ley, del seguro privado. Ya en el año 1950 se dictó la Ley del Contrato de Seguro, en virtud de la cual quedaron totalmente anulados y sin efecto, derogados, artículos del Código de Comercio y artículos del Código Civil, haciendo una total y nueva definición del contrato de seguro, suprimiendo en su artículo 1.º —esto es interesantísimo— la mención mercantil, dejando un poco en el aire si el seguro es o no es civil o si es o no mercantil; una definición un tanto aséptica, pero que, técnica, científica y jurídicamente, es válida.

Nuestro Gobierno, cumpliendo con lo que señalan los artículos 114 y 51 de la Constitución, entiende, por una necesidad ya histórica y auténticamente de tipo económico, que debe irse a una regulación del seguro privado, y aquí está el proyecto. Señorías, pierdan ustedes unos minutos, pocos minutos, quizá, para, en vez de leer el periódico, leer el Preámbulo del dictamen que viene a esta Cámara, porque a todos interesan, señorías, además de las noticias, las Leyes que se confeccionan en esta Cámara, y que son de aplicación a la ciudadanía. Lean ustedes ese Preámbulo, y verán que nos encontramos en presencia de un proyecto de Ley francamente bueno.

¿Por qué es francamente bueno, a juicio del que os dirige la palabra? Porque pone orden en el campo del seguro y porque va buscando también la protección del ciudadano asegurado. ¿Cuántos de ustedes no han sabido de asegurados que han dicho: nos han engañado, hicimos una póliza de seguros y resultó que cuando se produjo el riesgo, la compañía tal o cual no cumplió con sus obligaciones? Muchos casos se dan. Pues bien, esta Ley tiende, evidentemente, a ordenar jurídicamente, a poner orden en el campo de la economía del seguro, a sanear el campo del seguro, porque son hoy día, desgraciadamente, decenas de entidades aseguradoras —y no cito nombres ni denominaciones porque no ha lugar— que no saben cumplir o no pueden cumplir sus obligaciones aseguradoras. Hay que sanear este campo, y a esto viene esta Ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, las características del proyecto son claras: una construcción jurídica —a juicio de este modesto Abogado, aprendiz de jurista— casi perfecta; comparándola con la del año 1954, que era una especie de batiburrillo jurídico de preceptos, aquí hay un ordenamiento y una estructura, a mi juicio, casi perfecta. Por tanto, solamente me cabe la satisfacción de defender esta Ley y de

solicitar la máxima atención de SS. SS. en el curso del debate.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Arias Cañete.

El señor ARIAS CAÑETE: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el Senador Ruiz Mendoza nos ha manifestado que estábamos ante una buena Ley. Hubiera podido ser una buena Ley, y lo hubiera podido ser porque, teniendo una estructura técnica razonable y unas finalidades lógicas, sin embargo, pequeños factores introducidos en la misma distorsionan la bondad de sus posibles efectos.

Y vamos a tratar, en una intervención breve, de puntualizar cuáles son estos factores distorsionantes. En primer lugar, y en esta Cámara, se ha introducido un factor de distorsión importante, que viene siendo habitual en últimas Leyes, que es la introducción en Comisión de enmiendas que alteran sustancialmente contenidos fundamentales de las Leyes. Me refiero a la regulación de las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación. Porque mientras que en el proyecto se contemplaba que eran operaciones estrictamente de seguros y sometidas a la Ley, en el artículo 2.º, una enmienda socialista, introducida a última hora, las excluye de las operaciones sometidas a la Ley y las contempla como un portillo abierto que se introduce entre las operaciones que se llaman, en principio, prohibidas y de carácter vergonzante, y parece que se quiere permitir que las compañías de seguros puedan realizar estas operaciones de gestión. Pero fíjense SS. SS. en la distorsión que supone esto, porque es evidente que las compañías de seguros van a gestionar fondos colectivos de jubilación, pero sujetas a la Ley del Seguro, en tanto que cualquier otro intermediario financiero va a estar sujeto a una normativa mucho más flexible y la competencia en el sector no va a existir. Este es, pues, un primer factor de distorsión que aparece en la Ley, y esperamos que pueda ser corregido en este trámite parlamentario.

En segundo lugar, se nos dice en la Exposición de motivos que una de las aspiraciones de la Ley es adaptar la normativa en materia de seguros a la que rige, con carácter general, en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, esta adaptación no es cierta en dos ámbitos fundamentales, como son, en los mínimos de capital social exigido y en los mínimos de fondo de garantía, así como en los períodos transitorios.

El tema no es baladí, porque estando España en trance de integración en la Comunidad Económica Europea y no existiendo período transitorio en el seguro, nuestras compañías de seguros se van a ver integradas en la Comunidad Económica Europea en competencia con empresas comunitarias, pero sin los mecanismos de adaptación que la propia Comunidad en su día concedió a sus propias empresas.

Esto nos lleva al punto fundamental de discrepancia con el Partido Socialista en la regulación del sector segu-

ros. Porque por el efecto de la regulación de esta Ley se plantean unas exigencias de capital social —que luego analizaremos en sucesivas enmiendas—, sin conceder períodos transitorios suficientes para que nuestras empresas se adapten a la normativa que impone el Gobierno. ¿Cuál es el efecto de esto? No figura en la Memoria del proyecto socialista ningún cálculo del volumen de empresas afectadas y el número de puestos de trabajo que se pueden amortizar por la aplicación de esta Ley. Pero existe un precedente legislativo, el proyecto de Ley de ordenación del seguro privado, que elaboró Unión de Centro Democrático en 1981, en el cual se establecía que cuando el capital social se fijaba en 200 millones ya había prácticamente 420 sociedades anónimas y 90 Mutuas que no cumplirían estos requisitos, y se preveía que, por aplicación de este proyecto de Ley —del de Unión de Centro Democrático de 1981— prácticamente podrían desaparecer unas cien empresas. Teniendo en cuenta que el Partido Socialista ha elevado los límites de capitales sociales, nos encontramos con que pueden desaparecer del orden de doscientas empresas y es posible que 12.000 puestos de trabajo corran un riesgo grave, porque, señorías, las empresas de seguros grandes irán a cesiones parciales de seguros, pero no a absorciones totales de las compañías más chicas, y, además, el hecho de los períodos transitorios, tan reducidos que se establecen, de tres años, van a determinar que las empresas grandes esperen al final de los períodos de tres años para absorber a las chicas en malas condiciones para los accionistas y para los trabajadores de éstas.

En definitiva, nosotros creemos que esta Ley está haciendo una reconversión del sector seguros, pero sin los mecanismos de flexibilidad necesarios para que sea una reconversión pacífica, y no una reconversión traumática y violenta, como va a ser.

Por ello, nosotros hemos formulado una serie de enmiendas que esperamos que sean aceptadas en este trámite, y mientras no sean admitidas, mantendremos nuestra oposición a esta Ley, y no la consideraremos tan buena de mantenerse en estos términos.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Oliveras.

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Señor Presidente, señorías, sin perjuicio de profundizar en el curso del debate en aquellos puntos de discrepancia que este Grupo mantiene con respecto al proyecto de Ley que nos ocupa, quisiera manifestar que nuestra posición es la que ya va siendo habitual. Por un lado, admitimos la conveniencia del proyecto —este es el caso de este proyecto de Ley—, y dadas las naturales discrepancias, vamos a aportar todo nuestro esfuerzo para, en función de las mismas, contribuir a su mejora.

Tal como he indicado, estas discrepancias se pondrán de manifiesto en el curso del debate. Pero quisiera en este turno, y muy brevemente para no ser luego reiterativo, referirme a dos aspectos concretos que nos preocu-

pan. Uno, la inclusión del mutualismo en este proyecto de Ley, cosa que nosotros consideramos improcedente, porque el seguro privado y el mutualismo de previsión social tienen naturaleza jurídica distinta. Además, porque al incluir el mutualismo de previsión social se invaden competencias exclusivas que en esta materia contemplan determinados Estatutos a los cuales luego nos referiremos. Esta es, precisamente, la de la distribución competencial, otra cuestión fundamental, a la cual también nos referiremos en el debate.

No quisiera terminar este breve turno sin dejar de manifestar en este momento la preocupación de nuestro Grupo por lo que ya viene siendo norma del Gobierno y del Grupo mayoritario en la tramitación de varios proyectos de Ley. Me refiero al olvido sistemático de las competencias que los Estatutos reconocen.

Raro es el proyecto de Ley en el que no tengamos que denunciar este hecho. No sé si se trata de un propósito deliberado para irlo atizando poco a poco, sectorialmente, lo que no pudo hacerse de golpe y de una vez por todas con la frustrada LOAPA, o si es simplemente un olvido de esas competencias a la hora de redactar estos proyectos de Ley. Pensamos que sea lo primero, más bien el del propósito deliberado, ya que las advertencias que venimos haciendo de forma reiterada, como reiterada es la causa a través de nuestras enmiendas, no son tenidas en cuenta.

En todo caso, señor Presidente, señorías, en posteriores intervenciones intentaré exponer puntualmente nuestras objeciones de una u otra índole al proyecto que nos ocupa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Zavala.

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: Señor Presidente, señorías, este proyecto de Ley sobre ordenación del seguro privado, que sustituye a la Ley del 16 de diciembre de 1954, es, indudablemente, un proyecto que se hacía necesario, por la serie de innovaciones en esta materia, y para que tuviera una cobertura jurídica; cobertura jurídica que se pretende en este proyecto de Ley al tratar, principalmente, a semejanza del ordenamiento europeo, de fomentar la contratación de concentración de empresas acompañadas de una especialización de las mismas, la estructuración de las mutualidades y, como dice la Exposición de motivos, dando entrada a la figura jurídica de la sociedad cooperativa de seguros. Pero muchas de estas cosas se han logrado a costa de las pequeñas aseguradoras que tienen un plazo breve de tiempo para ampliar el capital social o fondo mutual.

Uno de los principios que sienta también este proyecto de Ley es el de la unidad de mercado. Nosotros creemos que no hacía falta citar este principio de unidad de mercado, porque ya la unidad de mercado está asegurada por el carácter de generalidad y obligatoriedad en que deben ser aplicadas las normas básicas que contiene este proyecto de Ley. Por ello no deben de tener el carácter de

básicos y administrativos los preceptos, en general, pues en el caso de que lo fueran, desaparecería la totalidad de las competencias señaladas por los Estatutos en esta materia a las Comunidades Autónomas que puedan tenerlos.

Es preciso recordar una vez más el modelo que estructura la Constitución, el del Estado de las Autonomías, que lleva consigo una descentralización política que supone un reparto de poderes públicos que afecta también al ordenamiento del seguro privado.

El proyecto de Ley recoge en su artículo 39 las competencias que tendrán las Comunidades Autónomas sobre desarrollo legislativo y de ejecución dentro de su territorio, con las limitaciones siguientes: primero, que se refieran a las entidades de seguro directo; segundo, con domicilio social dentro del territorio autónomo, y tercero, que esas operaciones y localización de los riesgos que asegure se limiten al territorio de la Comunidad Autónoma.

El proyecto de Ley considera la territorialidad como límite de competencias de las Comunidades Autónomas en materia de seguros, pero no tiene en cuenta que una cosa es el ejercicio de una competencia por una Comunidad Autónoma que haya de realizarse en el territorio de la misma, y otra cosa es que tal ejercicio tenga una eficacia fuera del territorio de dicha Comunidad; es decir, a nuestro entender, la territorialidad hace referencia al ejercicio de una competencia, no necesariamente a sus efectos, en cuanto éstos establezcan relaciones jurídicas o realicen actividades de carácter instrumental fuera del territorio de la misma, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de julio de 1983.

Dadas las limitaciones señaladas, entre ellas y muy principalmente que el riesgo quede localizado dentro del territorio de la Comunidad, hace que en ramos de seguros de vida, de accidentes, de enfermedad, de crédito y caución, etcétera, es decir, una gran parte de los ramos del seguro, sean inviábiles, porque el riesgo puede quedar localizado fuera del territorio a la Comunidad Autónoma, en contra de lo que dice el proyecto de Ley.

Estimamos que el proyecto del Gobierno anterior, el del año 1981, era más abierto a las Comunidades Autónomas; éstas podían controlar el funcionamiento de las entidades de seguros, la solvencia de las mismas, el que pudieran establecer medidas cautelares; preveía la posibilidad de establecer procedimientos de sanción hasta 500.000 pesetas, etcétera, pero todo esto ha desaparecido de este proyecto de Ley.

En realidad, este proyecto, fuera de lo que hemos dicho en referencia a las pequeñas aseguradoras, indudablemente es bueno, pero en el aspecto autonómico no solamente no es bueno, sino que es malo y, como hemos visto, regresivo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Sierra.

El señor SIERRA HERRERA: Señor Presidente, señorías, al expresar nuestra postura respecto a la Ley de ordenación del seguro privado en el estado en que actualmente se encuentra, creo que lo más que puedo decir

para resumirlo es que, por nuestra parte, tenemos la satisfacción del deber cumplido; no es mucho, ya lo sé. No es una Ley mala. No ha pasado por nuestra imaginación presentar una enmienda de veto. Ha habido otra presentada por otro Grupo y se ha retirado, lo que parece confirmar mi opinión. Tampoco es una Ley perfecta; repito que me refiero al estado actual, y creo que algún Senador socialista suscribirá en parte lo que digo.

Para zanjarlo, diría que me parece una Ley manifiestamente mejorable. Alguien la ha calificado como de una Ley técnica. Creo que fue Televisión estatal el sábado pasado, la Televisión a secas, perdonen el pleonasma porque no existe más que esa Televisión, pero no estoy totalmente de acuerdo. Algo hay de cierto; tiene un lado técnico. Pero de una Ley que afecta a los asegurados, es decir, al pueblo, que afecta a los agentes, que afecta intereses encontrados, pero conciliables de las compañías, de las mutualidades, de las sociedades de crédito, e incluso que afecta y afectará cada vez más a las inversiones extranjeras, repito que de una Ley que maneja intereses tan dispares, lo menos que se puede decir es que tiene una profunda carga social.

Creo que no han sido las dificultades técnicas, sino estas otras las que han condicionado ese camino más bien tortuoso que ha seguido a lo largo de su tramitación.

Es una Ley de altibajos, de veleta al viento que sopla. Ya en el Congreso supuso un quiebro imprevisto aquella inesperada unanimidad lograda en un santiamén por un Diputado de un Grupo minoritario, quiebro que se ha vuelto a producir, pero en el sentido contrario, a la entrada de la Ley en el Senado. Hubo en la Ponencia un evidente acercamiento de posiciones y una magnífica predisposición para seguir por ese camino en la Comisión tal como consta en su informe, donde se dice reiteradamente que determinadas enmiendas no son rechazadas sin perjuicio de lo que pueda proponerse a la vista del debate en Comisión.

Pero llegado este momento, nuestra ilusión se desvaneció cuando se deshizo el encanto y nos quedamos como cenicienta cuando vio desaparecer la carroza con la última campanada. Y cuando estábamos intentando explicarnos esos extraños vericuetos por los que discurría la línea de actuación socialista, nos encontramos con una enmienda «in voce» tardía, casi póstuma, sobre el tema de la administración de los fondos de pensiones. La importancia del tema hizo que se suscitaran reuniones y comentarios y unos contactos que cuajaron aparentemente en una cláusula adicional que mitigaba el grave efecto de esta enmienda. Se aplazó el tema, y al final del debate en Comisión nueva sorpresa; vuelve a aparecer la enmienda, pero no fue aprobada por unanimidad, sino por mayoría, porque no contenía la cláusula adicional.

Confieso que con esa táctica lograron a veces que perdiéramos el rumbo y hubo ocasiones en donde dejamos ya al adversario, cosa lógica, porque cuando volvíamos a encontrarnos no estaban donde les gustaba, sino a que veces estaban a nuestra derecha. ¡Qué cosas se ven! Esto me sugirió varias veces la frase de un ilustre Senador, no

de estas legislaturas, sino de hace unos dos mil años: «Ubinan gentium sumus?». Porque, verdaderamente, había momentos en que no sabíamos si estábamos dialogando con los socialistas o con otros. Todo esto ha tenido una ventaja, la de que por lo menos esta vez no hemos oído esa clásica acusación de que no tenemos otra mira que defender privilegios. Ya no faltaba más que eso.

¿Cuál es y ha sido la línea del Grupo Popular en el debate y tramitación de esta enmienda, acertada o no, porque la verdad no es absoluta? Al menos es coherente y conciliadora. Porque pensamos que los intereses encontrados no suelen ser irreconciliables, a no ser que nos obstinemos en adherirnos «a priori» a uno de ellos y no busquemos, en cambio, los puntos de contacto. Porque sostenemos que todos aquellos que pueden ejercer una actividad deben estar en condiciones de ejercerla con igualdad de trato. Porque sostenemos que las exenciones que se derivan de la aplicación de la Ley deben aplicarse a todos, aunque suponga un ligero incremento en los gastos del Estado. Porque sostenemos que una legislación que nos aleje de la Comunidad Económica Europea no es lo más conveniente en estos momentos. Y porque pensamos que las pequeñas y medianas empresas tienen una importancia vital, y si se aplica la Ley —repito— en su estado actual, en un breve plazo pueden desaparecer docientas, lo que supone la pérdida de muchos puestos de trabajo, esos puestos de trabajo que nos interesa a todos defender, a la mayoría y a la oposición. Esta es nuestra línea.

Estamos abiertos al diálogo hasta el último momento, tanto en la Cámara como fuera, porque creemos que se puede terminar de perfeccionar esta Ley.

Y no quiero acabar mi intervención sin aludir a otro tema de discrepancias: el Grupo Popular en todos los debates ha manifestado siempre ser partidario de la máxima legalización y, sinceramente, no comprendo esa excesiva propensión al reglamentarismo del Partido Socialista.

Lo hemos discutido repetidas veces y lo comprendería si esperasen gobernar ciento siete años, pero no creo que sean tan poco originales. Eso ya lo dijo alguien y sufrió un error de poco más de un siglo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Señorías, procuraré bajar la voz porque si no molestaré los tímpanos de sus señorías.

Voy a ver si puedo contestar concisamente a cada uno de los señores Senadores que han intervenido anteriormente.

Senador Arias, para su señoría el defecto de la Ley está en los capitales que se exigen ahora a las entidades aseguradoras. Pues bien, el Gobierno con este proyecto de Ley lo que ha hecho, ni más ni menos, es un estudio de la situación económica actual y sobre la base de un artículo que yo recuerdo que fue discutido tremendamente en las Constituyentes (el artículo 38 de la Constitución), en don-

de se decía que aparte de la libertad de empresa —que siempre he oído hablar en esta Cámara de la libertad de empresa y de mercado—, se olvidan —sus señorías se han olvidado muchas veces— de lo que se dice al final del citado artículo: «... y, en su caso de la planificación». Al Gobierno le corresponde la planificación. Esta fue una materia tremendamente discutida en la Comisión Constitucional.

Con su criterio de libertad de mercado los socialistas, entendiendo que la economía debía estar planificada, se llegó a este acuerdo de aceptar libertad de mercado, pero al mismo tiempo dando facultades al Gobierno para planificar la economía. De ahí se deriva precisamente el que ahora se vaya a este aumento de capitales. ¿Por qué? Porque una forma de planificar el mercado es saneándolo. Y ¿cómo se sana el mercado del seguro? Sencillamente quitando las ficciones económicas de multitud de entidades aseguradoras que dicen tener lo que no tienen. Que dicen disponer de medios que no tienen, en razón directa a los riesgos que asumen a través de sus agencias de seguros, diciendo: nosotros estamos en condiciones de pagar esto, esto y esto, y resulta que, cuando hay que pagar, no se paga esto ni aquello y entonces en el Ministerio —y le consta a S. S., Senador Arias, porque usted es un hombre muy enterado de estas cuestiones de tipo fiscal— hay en la lista negra montones de entidades aseguradoras que no pueden, y lo he dicho antes, cumplir con sus obligaciones, ni pagar cheques, a lo mejor por un problema de tipo circulatorio.

El Ministerio tiene que sanear y para sanear tiene, evidentemente, y se dice en el proyecto de Ley, que concentrar, y se concentra. ¿De qué manera se concentran las compañías? Subiendo los capitales, porque así se obliga a las compañías A y B a unirse para poder llegar a ese fondo que se exige, porque el otro, insisto, es una ficción. Da la sensación de que la libertad de mercado y la libre competencia es el batiburrillo, no; eso es un liberalismo, no diré decimonónico, sino de épocas aun anteriores, de que cada cual haga lo que quiera; no.

Señores, la economía exige ordenación y saneamiento en el momento actual, porque estamos cansados en la Cámara de decir —y ustedes lo dicen constantemente— que la situación es grave, es difícil. Por eso hay que adoptar medidas quirúrgicas y en el campo del seguro era muy necesario. Eso en cuanto a ese aspecto.

En cuanto a los problemas que nos plantea nuestro querido amigo Zavala y nuestro querido amigo Oliveras (y lo digo de verdad, porque en la Comisión siempre hemos discutido y dialogado con auténtica amabilidad, como corresponde entre señores Senadores), debo decir que el proyecto de Ley es respetuoso también con la Constitución. Lean detenidamente los artículos 149 y 150, que se refieren a los problemas de las competencias. El Estado en modo alguno puede hacer dejación de sus derechos con respecto a este campo del seguro y al campo de la planificación de la economía.

Lean ustedes detenidamente la Disposición final primera y verán cómo el Gobierno, en su proyecto de Ley,

evidentemente es respetuoso con las competencias autonómicas.

Esta es una Ley de bases de ordenación del seguro y las Comunidades tienen esta facultad. Conste que mi Comunidad valenciana tiene en su Estatuto esa facultad, igual que la catalana, la vasca y la gallega. Tenemos la seguridad de poder, a través de nuestras Cámaras regionales o de comunidad, extender el campo del seguro en unas competencias propias. No entremos en el campo del Estado; seamos respetuosos con el Estado.

Por último, quiero contestar al señor Sierra. Señor Sierra, una Ley no es la fabricación de una serie de embutidos, donde entra la materia y se obtiene el resultado al final del proceso. Una Ley es la discusión, es la reflexión, es el digo y, si es preciso el «diego», en el momento oportuno, y el momento oportuno es la Ponencia, es la Comisión, y el momento oportuno es, incluso, hasta el momento actual y aquí se hace y se deshace, evidentemente, porque esa es la construcción de una Ley. Es la negociación, es, no el consenso, la negociación. Y en la negociación entra la discusión, el diálogo, el toma y el daca, si procede, y si procede según el criterio del Gobierno, evidentemente, y el criterio del Grupo que apoya al Gobierno. Para eso estamos aquí. No hemos ido como un barco sin rumbo. No. Sabemos navegar. Somos aficionados al Poder, pero se está navegando. Que de vez en cuando haya que pegar algún golpe de timón, eso hasta los mejores capitanes de barco lo hacen. Porque no todos navegan en línea recta, señores. Depende del estado de la mar. Si la mar es buena, o si hay marejadilla, o si hay temporal. Así se va y así se navega. Y, evidentemente, el Grupo Socialista, en la confección de las Leyes que nos vienen del Gobierno, actúa de acuerdo con esa táctica marinera. Y perdónese, señores de la minoría, que use este término marinero. Pero es que yo creo —aunque la señora Senadora gallega de esto entiende mucho— que es un buen ejemplo de poder también hacer la Ley. Y esta Ley está reflexionada.

No digo nada en cuanto a los fondos de gestión, porque de eso ya hablaremos en su momento oportuno.

Nada más, señor Presidente. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias por la brisa marina que ha introducido en la Cámara en el mes de julio.

Vamos a votar. Cierren las puertas.

Votamos el preámbulo del dictamen de la Comisión, que no tiene enmiendas.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 166; a favor, 165; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Entramos en la discusión del articulado.

Artículo 1.º Quería preguntar a los señores portavoces —porque me ha hecho una indicación el Vicepresidente, que ha estado presidiendo antes de que yo entrara en la sala— si hay algún acuerdo en la discusión de la Ley.

El señor ARIAS CAÑETE: En principio se trataría de agrupar los mayores bloques posibles de enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Pero sin ningún plan preconcebido de capítulos, etcétera.

El señor ARIAS CAÑETE: En una intervención única, prácticamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor Oliveras para defender la enmienda 18 al artículo 1.º

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Señor Presidente, señorías, voy a referirme agrupadamente a todos los votos particulares que nuestro Grupo Parlamentario ha reservado.

Al artículo 1.º tenemos reservados los votos particulares correspondientes a la enmienda 17, que pretende adicionar un número 4 al artículo 1.º; la enmienda 18, que pretende añadir una frase al final del número 1, y la 19, que pretende modificar la redacción del número 3.

La finalidad de este artículo es establecer el objeto de esta Ley, que es la ordenación básica del seguro privado, y regular su control. Determinar que tiene la consideración de seguro privado toda operación de seguro a previsión, quien quiera que sea el asegurado o asegurador, con la salvedad de los sistemas de previsión que constituye la Seguridad Social obligatoria.

Nuestro Grupo entiende que las mutualidades de previsión social no deberían ser sometidas a la regulación de la Ley.

Tenemos varias enmiendas en este sentido, entre ellas una enmienda de supresión del Capítulo IV. Y la primera de ellas es, precisamente, la 17, que pretende adicionar un número 4 al artículo 1.º, estableciendo que tampoco quedan sometidos a la regulación de la Ley los Montepíos y mutualidades de previsión social.

La finalidad del mutualismo de previsión social es distinta de la de las entidades aseguradoras que operan en el seguro privado, las cuales tienen carácter mercantil, mientras que las mutualidades son asociaciones constituidas libremente —después iremos insistiendo en ello— para asumir voluntariamente los riesgos que gravitan sobre los asociados.

La enmienda número 18 pretende tan sólo añadir una frase al número 1; ha sido ya rebatida por el Senador Ruiz Mendoza. Lo que pretendemos añadir es «todo ello en el marco de la libertad de empresa».

La enmienda número 19 propone modificar la redacción del número 3 de este artículo 1.º Su motivación es delimitar más claramente el objeto de la Ley y evitar la confusión que podría producirse si se interpreta la palabra «constituyen» en un sentido estricto o restrictivo. Si el objeto fundamental de la Ley es la ordenación del seguro privado y la regulación de su control, deben quedar excluidos no sólo los sistemas que constituyen la Seguridad Social obligatoria, sino también aquellas entidades que colaboren en la gestión de la misma.

Al artículo 3.º tenemos dos enmiendas, la número 20, que pretende modificar la letra c), y la número 21, que pretende modificar la letra d). Pretendemos suprimir en la letra c) de este artículo la frase «o el otorgamiento de avales o garantías», ya que el artículo 68 de la Ley de Contratos del Seguro, de 8 de octubre de 1980, contempla la figura jurídica del seguro de caución, ampliamente conocido en la práctica aseguradora bajo la denominación de seguro-aval. Creemos que si se suprime la frase, como propone nuestra enmienda, la redacción quedaría mucho más clara.

En esta misma enmienda se pretende también suprimir la referencia concreta al Ministerio de Economía y Hacienda haciendo tan sólo mención a los Ministerios competentes, porque nos parece una redundancia citar al Ministerio de Economía y Hacienda para después añadir los demás Ministerios competentes.

La enmienda 21 pretende que se modifique la letra d) de este artículo 3.º y que se autorice a las compañías de seguros que operan en el ramo de enfermedades y enterramientos a contemplar pólizas acumulativas de accidentes individuales contratadas con otras entidades aseguradoras para realizar operaciones en el indicado ramo. Si no se mantiene esta posibilidad ello significará un grave problema para muchas compañías que hoy operan en estos ramos y lesionaría muchos de los derechos adquiridos.

Al artículo 7.º tenemos la enmienda número 23, que la damos por defendida en los propios términos de su justificación.

Al artículo 10 tenemos formulada nuestra enmienda número 24, que propone añadir un número 6. Nuestro Grupo tiene el criterio de no aplicar a las mutualidades de previsión social las garantías que se aplican a las entidades mercantiles de seguro privado, porque tanto su actividad como su naturaleza jurídica son totalmente distintas, lo hemos dicho ya, y creemos que debería haberse arbitrado otro sistema que, garantizando las prestaciones que estas entidades asumen, no fuese similar al del seguro; justamente el artículo 19, no sujetándoles a la cuantía mínima del Fondo de Garantía, hace un reconocimiento de su distinta naturaleza en cuanto a las prestaciones.

Al artículo 12 tenemos formulada la enmienda 25, que también la damos por defendida en los justos términos de su justificación.

Pasamos a la enmienda número 26, que propone la supresión del Capítulo IV del proyecto de Ley. La razón es la siguiente. El proyecto de Ley sobre ordenación del seguro privado incluye y las hace objeto de este Capítulo IV a las mutualidades de previsión social reguladas hasta ahora por la Ley de 6 de diciembre de 1941, para someterlas al mismo control de solvencia que el resto de las entidades aseguradoras, suprimiendo las distintas jurisdicciones administrativas a las que ahora están sometidas, integrándolas a tales efectos en la específicamente dedicada al control de seguros.

Para nuestro Grupo lo mejor hubiera sido regular el mutualismo de previsión social en otras disposiciones

distintas de lo que es la Ley del Seguro Privado. En todo caso, hubiéramos preferido una Ley que actualizara la de 1941, ya desfasada, una Ley que ordenara y regulara el mutualismo de previsión social no integrado en la Seguridad Social y que formara parte de otro texto que no fuera éste, en el que, tal como se afirma en la justificación de nuestra enmienda, no encaja.

Dos razones básicas nos llevan a mantener esta posición. Primera, la finalidad que persiguen que les confiere una naturaleza específica. Segunda, la invasión que el proyecto puede suponer en las competencias que en materia de mutualismo corresponden a determinadas Comunidades Autónomas.

La finalidad del Mutualismo de Previsión Social es la de ejercer, sin ánimo de lucro, una modalidad de previsión de carácter social o benéfico. Por consiguiente, su naturaleza es distinta de la de las entidades aseguradoras que operan con el seguro privado, cuya naturaleza es ajena a dicha finalidad, puesto que tienen carácter mercantil.

El Mutualismo de Previsión Social no es una industria, ni un negocio, ni realiza actos de comercio.

El Mutualismo de Previsión Social interviene en el negocio jurídico aleatorio, respondiendo de un daño o circunstancia sobrevenida mediante asociaciones constituidas libremente por personas que se autoprotegen mutuamente, definiendo con ello su naturaleza jurídica, que es la obligación por la cual el conjunto solidario de socios que constituyen la entidad acepta las consecuencias aleatorias sobrevenidas.

Cuando no las asegura la mutualidad y el asegurador es un comerciante, artículo 380 del Código de Comercio, el negocio queda sometido a la legislación mercantil, pero no así en el caso de que quien las asegura es la mutualidad, persona jurídica creada por los mutualistas y a la que no se puede atribuir la presunción legal de ejercer actividades de comercio, tal como determina el artículo 3.º del Código de Comercio para tener la condición de comerciante.

La segunda razón de nuestra posición deriva de la invasión que el proyecto puede suponer en las competencias que en materia de Mutualismo corresponden a determinadas Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

El Mutualismo no encuadrado en la Seguridad Social es materia que el Estatuto de Autonomía del País Vasco incluye en el artículo 10.23 como competencia exclusiva; asimismo, como tal competencia exclusiva, lo incluyen también los Estatutos de Autonomía de Cataluña —artículo 9.º, 21.—, de Andalucía —artículo 13.20.— y el de Valencia —artículo 31.21.—, y la Ley de Amejoramiento de Navarra —artículo 44.27.

En materia de ordenación del seguro corresponde a todas estas Comunidades Autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución.

La legislación mercantil, en cambio, si que es competencia exclusiva del Estado —artículo 149.1, 6.º de la Constitución—, así como las bases de ordenación del seguro —también artículo 149.1, 11.º

Partiendo de estas premisas, deberíamos plantearnos precisamente en esta Cámara si la Administración central puede sustraer a una Comunidad Autónoma, y por medio de una Ley, una competencia asumida como exclusiva a través de sus Estatutos de Autonomía, el Mutualismo no integrado en la Seguridad Social, respetando, eso sí, la legislación mercantil, respecto al cual el Estado no se reserva competencia exclusiva.

En primer lugar, cabría preguntarse si hay que considerar mercantil el proyecto de ordenación del seguro y partiendo de que este proyecto es, como se reconoce en la Exposición de motivos, legislación reguladora de las actividades del seguro privado con la finalidad de proteger a los asegurados, hemos de fijar, siguiendo a Garrigues, que constituye el Derecho de seguros el conjunto de normas jurídicas que regulan el seguro como manifestación social. El objeto del Derecho mercantil es el Derecho privado del contrato de seguro, por lo que quedarán fuera de tal consideración las normas jurídico-administrativas dictadas con el fin de proteger a los asegurados.

Por ello, no cabe la sujeción de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas mencionadas, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Valencia y Navarra, en materia de Mutualismo no integrado en la Seguridad Social, por una pretendida consideración mercantil de una Ley de ordenación del seguro privado.

En la enumeración de competencias exclusivas del Estado hecha a través del artículo 149 no se ha fijado reserva alguna en lo concerniente al Mutualismo no integrado en la Seguridad Social, y así, los Estatutos de Autonomía de todas esas entidades autónomas, en la enumeración de sus competencias exclusivas refieren esta materia, sujetando su regulación al respeto de la legislación mercantil, que en ningún caso puede afectar al negocio jurídico que practica la Mutualidad y sus socios, el cual se rige, no por el contrato mercantil de seguros, sino por sus Estatutos, que representan un contrato innominado que se fundamenta en la solidaridad de los individuos ante el suceso aleatorio que puede afectar a alguno de ellos.

Esta específica naturaleza del Mutualismo de Previsión Social, en otro tiempo Asociación de Socorros Mutuos, con anterioridad Hermandad, Cofradía, etcétera, que se tiende ahora a trastocar, tiene una presencia cierta en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y estas características, que son históricas y que son actuales, deben defenderse a la luz de los preceptos del Estatuto, sin caer en la confusión que pretende el proyecto de Ley.

El Derecho mercantil fue en su origen el derecho propio del comerciante. A través del tiempo, es cierto, hay actos de comercio que pierden carácter subjetivo, por ejemplo, toda la materia relativa al Derecho cambiario, pero hay instituciones que se mantienen con firmeza en sus orígenes, y una de ellas precisamente en Cataluña es la del Mutualismo, originando una específica relación jurídica totalmente ajena al derecho propio de los comerciantes, cuya causa no es el ánimo de lucro y cuyo objeto consiste en indemnizarse mutuamente en caso de sobrevenir la contingencia desfavorable.

Cataluña, cuya historia gremial es evidente y ha perdurado, hizo posible que nacieran en torno a los distintos gremios sistemas solidarios de defensa ante el infortunio, sin que esto tuviera la consideración subjetiva de acto de comercio ni la objetiva determinada por la causa de lucro, la realidad que se aprecia en las Mutualidades de Previsión Social.

Estas son las razones, señorías, por las cuales proponemos la supresión del Capítulo IV de este proyecto de Ley.

Conscientes, sin embargo, de la nula probabilidad de que nuestra enmienda de supresión del Capítulo IV prospere, hemos formulado una serie de enmiendas al articulado de dicho Capítulo que responden a algunas de las razones indicadas o a ambas a la vez, y que voy a darlas por defendidas para no ser reiterativo, remitiéndome, además, a los términos específicos de sus propias justificaciones.

Estas enmiendas son: la número 29, que pretende modificar el punto 2 del artículo 17; la número 30, que pretende añadir un nuevo artículo 17 bis; la número 31, que pretende añadir un nuevo artículo 17 ter; la número 32, que quiere modificar el apartado 1 del artículo 18; la 33, que también pretende modificar el apartado 2 del artículo 18; la 34, cuyo objeto es modificar el artículo 20; la 35, que pretende añadir un nuevo artículo 20 bis; mientras que la 36 propone sustituir el artículo 21, y la 37 adicionar un nuevo artículo 21 bis.

Además, y al amparo del punto 2 del artículo 117 del Reglamento del Senado, hemos convertido en enmienda al punto 3 del artículo 16 el mantenimiento de la frase «y la prestación de servicios en cualquiera de sus modalidades», que ha resultado suprimida del proyecto al haberse asumido en Ponencia la enmienda número 138, del Grupo Socialista. La supresión de esta frase es incomprensible, ya que significa la desaparición de más de 70 mutualidades de previsión social cuyo fin exclusivo es la prestación de servicios.

Según establece el artículo 10.2 «el Grupo IV comprenderá toda clase de prestación de servicios». Todas las entidades mercantiles, sean compañías o mútuas a prima fija o variable, pueden actuar en este grupo considerado como el más modesto de todos. No hay razón alguna para que el Mutualismo de Previsión Social no pueda operar en el Grupo IV, en el que tiene raíces profundas, puesto que la prestación de servicios constituye desde siglos la expresión más sentida de la solidaridad entre los mutualistas.

Hay que añadir que con el proyecto de Ley se pretende, como indica su Exposición de motivos, la adecuación a las normas internacionales, que se deriva de la posible adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Por ello, no puede desconocerse que la legislación de algunos países europeos, como puede ser la francesa o la belga, posibilitan que las mutualidades otorguen prestaciones de servicios de todo tipo.

Terminado el Capítulo IV, tenemos una enmienda, la número 38, que también responde a las mismas motivaciones y que, por consiguiente, la damos por defendida.

Al artículo 23 tenemos la enmienda número 39, que

pretende modificar el punto 3. Esta enmienda es puramente técnica. La expresión «reglas de la técnica aseguradora» puede tener, evidentemente, más de una interpretación; en definitiva, es el mercado el que dicta las reglas en cada momento. Por eso proponemos que los principios de equidad y suficiencia que han de respetar las tarifas se fundamenten no en una expresión ambigua, sino que se fundamenten en bases técnicas, de acuerdo con la información estadística y los principios actuariales que justifican sus diferentes componentes.

La enmienda número 40 propone sustituir el término de «póliza» por el de «condiciones generales»; también la damos por defendida.

Pasamos a defender las enmiendas número 41 y 42, que se refieren ambas al artículo 39. Este artículo 39, relativo a las competencias de las Administraciones públicas, establece en su punto 2 que las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, tendrán competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución, dentro de su territorio, de las bases de ordenación de los seguros privados contenidos en esta Ley y disposiciones básicas que la complementen, a lo cual no tenemos nada que objetar, puesto que se ajusta a lo establecido en el artículo 149.1.11 de la Constitución en cuanto a la competencia del Estado sobre las bases de ordenación del seguro y en cuanto a la competencia, por tanto, de las Comunidades Autónomas, según lo previsto en sus Estatutos, las que lo tienen previsto, y que ya he citado, para el desarrollo legislativo y la ejecución de dichas bases.

Nuestra enmienda consiste en proponer que la redacción del punto 2 termine ahí, ya que nos tenemos que oponer en cuanto a lo que sigue de que las entidades de seguro directo cuyo domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos que aseguren deben ser dentro de la Comunidad. Al decir «respecto de las entidades de seguro directo», el proyecto establece una diferenciación entre las entidades: las de seguro directo y las otras, y luego señala unos requisitos muy concretos: que su domicilio social radique en el territorio de las Comunidades Autónomas de que se trate y que su ámbito de operaciones y localización de los riesgos que asegure se limiten al territorio de la Comunidad. Con ello, se limitan, aunque sea en preceptos básicos, las competencias de las Comunidades Autónomas en cuanto al desarrollo legislativo de estas bases o en cuanto a la ejecución de las mismas. Se está diciendo cómo y de qué forma van a tener que desarrollar esas Comunidades los preceptos básicos de esa Ley de ordenación del seguro, y esto, evidentemente, es una limitación.

Con nuestra postura, si se admitiera, no comprometemos la unidad de mercado, que no ponemos en discusión, y cuyo principio compartimos; por el contrario, consideramos de suma gravedad que una vez que el Estado fije las normas de carácter general y uniforme sobre ordenación del seguro, que es el objeto de esta Ley, se limite la competencia de las Comunidades Autónomas en una de las actividades más relevantes, como es la de controlar el estado de solvencia de las entidades aseguradoras, con el

fin de velar, con el fin de tutelar, los legítimos intereses de los asegurados.

Y lo consideramos de suma gravedad porque es un nuevo intento que se realiza desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista de limitar la capacidad de las Comunidades Autónomas. Nos encontramos ante una Ley sectorial que erosiona los Estatutos de Autonomía, mermando las facultades de autogobierno de cinco instituciones autónomas, de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, de Valencia y de Navarra.

El punto 3 indica cuáles son las competencias de las Administraciones públicas en lo que se refiere al mutualismo no integrado en la Seguridad Social. Esta es una materia que los Estatutos de esas Comunidades que he citado incluyen como competencia exclusiva, con respeto a la legislación mercantil. Así como en materia de ordenación a la que se refiere el punto 2, el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 10.4; el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 11.2.a, el Estatuto de autonomía de Andalucía, en su artículo 15.1.3; el Estatuto de Autonomía de Valencia en su artículo 32.1.4, y la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra en su artículo 57.a, dicen que sólo tiene competencia la respectiva Comunidad para el desarrollo legislativo y la ejecución, y aquí nos encontramos con una materia de competencia exclusiva. Artículo 9.21 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; artículo 10.23 del Estatuto vasco; artículo 13.20 del de Andalucía; artículo 31.21 del de Valencia, y artículo 44.27 de la Ley de Amejoramiento de Navarra, que dicen todos ellos que su Comunidad Autónoma tendrá competencia exclusiva en cooperativas, mutualidades no integradas en la Seguridad Social y pósitos, respetando o conforme a la legislación mercantil, que es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.6 de la Constitución española.

Los redactores de todos estos Estatutos han distinguido entre ordenación del seguro y mutualismo, incluyendo a éste como competencia exclusiva, porque son dos cosas distintas, como hemos venido insistiendo.

Esta Ley no quiere distinguir, al decir el punto 3 que en cuanto a las cooperativas, montepíos o mutualidades no integradas en la Seguridad Social y en el ámbito indicado en el número anterior, se limitan y coartan totalmente las competencias de esas Comunidades Autónomas, porque si tienen la competencia de dictar normas, respetando las bases de ordenación del seguro, que son las señaladas en la Disposición final primera, y además en el ámbito de lo regulado en el párrafo 1.º de este artículo, hemos de convenir que más que limitada, más que coartada, la competencia exclusiva les queda lisa y llanamente anulada.

El Tribunal Constitucional en sentencia 72/83, de 29 de julio, que ha sido citada por el Senador Zavala, dice en materia de cooperativas y refiriéndose a la expresión «conforme a la legislación general de carácter mercantil», que se interpretará en el sentido de que habrá que respetar tal legislación, en cuanto sea aplicable a las cooperativas, como sucede en aquellos casos en que la legislación general de cooperativas remite a la legislación

mercantil, o también cuando contiene preceptos mercantiles, como acontece en algún caso.

Así, el alto Tribunal no admite una interpretación de legislación mercantil que conduzca a vaciar de contenido la competencia legislativa de la Comunidad Autónoma vasca en materia de cooperativas, reconociendo la competencia legislativa de la Comunidad, dentro de su ámbito territorial.

Por todo ello, proponemos la redacción de nuestras enmiendas al artículo 39.

Nuestra enmienda siguiente es la número 43, que pretende modificar la redacción del punto 2 del artículo 44, y nuestra pretensión es la de reducir la cuantía de la sanción. Nos parece demasiado 2 millones, y por ello nuestra propuesta exige las cifras que se habían planteado en el proyecto de Ley de 1981.

La enmienda número 44 pretende adicionar un artículo 46 bis; también se refiere a competencias de las Comunidades Autónomas, y por consiguiente la damos por defendida.

La enmienda número 45, me dijo mi querido amigo Ruiz Mendoza que en ella tiene un interés muy laudable; yo mantengo ese interés, la someto a votación, pero la doy por defendida.

La enmienda número 46 propone la supresión de la Disposición final cuarta y la enmienda número 47, en congruencia con la misma, también propone la supresión del apartado b) de la Disposición final cuarta. Damos ambas por defendidas, así como la número 48.

La enmienda número 50 propone modificar la redacción del apartado 1 de la Disposición transitoria primera. Nuestra enmienda pretende tan sólo ampliar el plazo que figura en el punto 1.º de esta Disposición transitoria primera. Ampliarlo de tres a cinco años, dada la magnitud de los capitales exigidos en relación a lo establecido en la legislación anterior, que en algunos casos puede suponer multiplicar por ochenta el capital actual. Nos parece que se debería dar un plazo de adaptación más amplio, y el de cinco años no se propone graciosa ni arbitrariamente, sino por analogía con los plazos que se dieron en su momento para la entrada en vigor en cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Europea.

Como también supongo que el plazo de tres años no es ni gracioso ni arbitrario, y entiendo que nuestros reparos tendrían que ser recogidos en el sentido de la dificultad que va a suponer, podría ser una solución a esta pretensión el que se formulara una enmienda transaccional que partiera, como decimos los campesinos de mi tierra, diferencias y lo dejáramos fijado en cuatro años.

La última enmienda formulada es la número 49 que pretende modificar el apartado 2 de la Disposición adicional tercera. A nuestro Grupo le parece que con el texto del proyecto de Ley se concede al Gobierno una delegación tan amplia que, en definitiva, el Gobierno podrá hacer lo que quiera en el plazo de un año a partir de la publicación de la Ley. No ponemos reparo a la constitucionalidad del texto, ponemos reparo a su conveniencia dados los amplios términos en que viene redactada esta Disposición adicional. Entendemos que la práctica del

Decreto debe ser restrictiva y por ello proponemos que el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de Ley.

Muchas gracias, señor Presidente, he terminado.

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Socialista va a impugnar todas las enmiendas agrupadamente?

El señor RUIZ MENDOZA: Sí, señor Presidente, agrupadas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente. Muy bien, Senador Oliveras, toda su exposición, pero me voy a permitir contestar a algunas de las enmiendas que yo creo fundamentales. En cuanto a las otras, por amor a todos los Senadores y por economía procesal, he de decir que no ha lugar. Es un término forense, que quizá no sea propio de esta Cámara, pero quiero decir con ello que hay multitud de enmiendas que el Senador Oliveras ha defendido en este Pleno que ya habían sido muy discutidas en la Comisión y sobre las que el Grupo Socialista mantiene la misma tesis en el día de hoy, aunque con independencia de ello, si quiero contestar, evidentemente, de una manera específica, a una o dos de las enmiendas.

La primera es la enmienda número 26 en la que el Senador Oliveras pide la supresión del Capítulo IV, que es importantísimo. Señor Oliveras, el capítulo IV de este proyecto de Ley no se ha traído a esta Cámara, y anteriormente al Congreso de los Diputados, por una simple consideración graciosa. No; es porque hoy día el campo del mutualismo de previsión es de gran importancia y no sólo para las entidades aseguradoras. En definitiva, las mutuas son entidades aseguradoras en un buen y amplio entendimiento del término, del seguro, lo que también hacen las mutuas es asegurar; los nombres no importan, y la prueba de ello es que el Código de Comercio las cita y el Código Civil las especifica.

Este proyecto de Ley ha traído a las Cámaras este capítulo IV sobre mutualismo por la importancia que evidentemente tiene en el campo del aseguramiento, porque insisto en que lo que se pretende con este proyecto de Ley es sanear todo el campo asegurador.

Al señor Oliveras le consta, como a mí, que hay mutuas, no de seguros, de tipo antiguo mercantil, sino mutuas de previsión que también tienen el ala tocada. Por eso el legislador (con todos los respetos a las mutuas antiguas que en Cataluña existen y en Valencia —tierra gremial— también desde muy antiguo), el Gobierno y el Ministerio de Economía y Hacienda han considerado que en un momento de dificultades económicas hay que ordenar todo esto, y se crean las bases de ordenación.

¿Esto quiere decir quitar competencias en la ejecución, incluso en aspectos que pudiéramos llamar complementarios, legislativos, a las Comunidades Autónomas? No, no por cuanto en la Disposición final primera el legislador y el proyecto de Ley vuelven a hablar de las competencias de las Comunidades Autónomas; es decir, que el

Gobierno no se le han olvidado las facultades autonómicas. Lo que se quiere es que este campo del mutualismo de previsión entre también en el ámbito de una Ley de bases de ordenación. No tiene una finalidad torticera ni malévolas, de decir: ¡Ah! no, de este medio y manera eludimos la intervención de las Comunidades Autónomas. No, no creo que esa sea la intención del proyecto de Ley. Y, si no, al tiempo, señor Oliveras, y con el tiempo veremos que se respetan, evidentemente las facultades que se conceden en los Estatutos de Autonomía en este campo del mutualismo. Esa es la enmienda fundamental.

Otro problema al que se refería S. S. sobre la modificación que propone la enmienda 39, es el problema de las tarifas. Dice S. S. que la expresión «reglas de la técnica aseguradora» es anfíbológica. Señor Oliveras, aquí no hay anfíbológica; es el uso claro del término, sin equívocos, no hay equívocos. Se habla precisamente de los principios actuariales y en el proyecto de Ley se trata de las técnicas aseguradoras y las reglas de la técnica aseguradora, y con eso ya basta.

En cuanto al plazo, que es otro de los problemas que tiene peso específico en el proyecto de Ley, entendemos, señor Oliveras, que cuando el Gobierno en su proyecto habla de los tres años tampoco es por puro capricho, porque ha sido estudiado, reflexionado, negociado, discutido en numerosas ocasiones y con un conocimiento de lo que sucede en la Comunidad Económica Europea. Pero, señor Oliveras, es que la situación económica española no es la de la economía belga, francesa o italiana; la economía española está en unas condiciones un tanto distintas y aun fuera de la Comunidad. Por tanto, se entiende por el Gobierno, a través de su proyecto de Ley, que ese plazo de tres años es suficiente. Y hay que tener en cuenta algo más, que no se quiere decir ni se ha dicho nunca: ya había un proyecto el año 1981 —y se ha nombrado esta mañana aquí— presentado por la Unión de Centro Democrático, relacionado con esta Ley. Señores, han pasado dos años, más tres años, son cinco años. ¿O es que aquí lo que interesa es ir alargando el tiempo? No. De hecho, las compañías, las entidades aseguradoras y los fondos mutuales han conocido todo este proyecto desde el año 1981 y han tenido tiempo para ir adaptando sus arcas y sus necesidades financieras a los fines del proyecto y cuando se ejecute, se rán los cinco años que, en definitiva, está dentro de la directiva de la Comunidad Económica Europea, ni más ni menos.

Con respecto al resto de las enmiendas, amigo Oliveras, digo: No ha lugar.

El señor PRESIDENTE: ¿Señores portavoces que piden la palabra? (Pausa.)

En ese caso, cierran las puertas. Vamos a votar. Señor Oliveras, vamos a votar sus enmiendas al artículo 1: ¿Se pueden votar agrupadamente?

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del

Grupo Cataluña al Senado números 17, 18 y 19, al artículo 1.º

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 147; a favor, seis; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el texto del dictamen de la comisión para el artículo 1.º

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 145; a favor, 135; en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 1.º

Entramos en el artículo 2.º, al que existe un voto particular del Grupo Popular que corresponde a una enmienda «in voce».

Tiene la palabra el señor Arias. *(Varios señores Senadores se levantan de sus asientos.)*

El señor ARIAS CAÑETE: Señor Presidente, voy a defender conjuntamente este voto particular al artículo 2.º y el voto particular al párrafo segundo del artículo 3.º porque están en íntima conexión. Son dos votos particulares formulados al amparo del artículo 117 del Reglamento de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Arias. Ruego a los señores Senadores que no salgan, si piensan votar, porque se va a entrar en seguida en la votación de una serie de artículos.

Continúe, señor Arias.

El señor ARIAS CAÑETE: La razón de que se quiera convertir en voto particular el texto anterior del proyecto de Ley radica pura y llanamente en que el Partido Socialista ha introducido una modificación anómala en este proyecto de Ley, por cuanto la gestión de fondos colectivos de jubilación ha pasado de ser operaciones sometidas a ser operaciones prohibidas, pero excepcionadas de la prohibición de carácter general.

En definitiva, inicialmente se consideraba que todos los fondos de pensión estaban sujetos a la normativa del seguro, y actualmente, dada la regulación que se establece, únicamente están sujetos a la regulación de los seguros los fondos cuando estén administrados por compañías de seguros, mientras que cuando los que los administran y gestionen sean otros intermediarios financieros, como la banca o cualquier empresa de inversión, no están sujetos a los estrechos cauces de esta Ley; por lo cual se crea un factor discriminatorio.

No obstante la defensa de este voto particular en el sentido de vuelta al primitivo proyecto, nuestro Grupo está abierto a cualquier tipo de transacción que mejore la redacción del proyecto, de manera que queden sujetas a las operaciones de seguro aquellas gestiones de fondos vinculadas con pólizas de seguros que garanticen deter-

minados extremos, en tanto que queden sujetas a la legislación del fondo de pensiones las restantes gestiones de fondos colectivos de jubilación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Señor Presidente, rogaría que S. S. leyese un escrito, con una enmienda transaccional, presentado a la Mesa por este Grupo, por si al señor Arias, del Grupo de Alianza Popular, le satisface y, en ese caso, habría una transacción de pleno acuerdo.

El señor PRESIDENTE: A la Presidencia ha llegado un escrito, pero, cómo no está firmado, lo devuelvo a S. S. para que proponga la enmienda «in voce». Si presentan el escrito firmado por los portavoces de los demás Grupos, la enmienda se aceptará.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente.

En el artículo 2.º del proyecto de Ley denominado «Operaciones sometidas», se incluiría, como letra d), el siguiente texto: «Las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación que consistan en administrar las inversiones y especialmente los activos representativos de las reservas de las entidades que facilitan prestaciones en caso de fallecimiento, en caso de vida o de invalidez, cuando concorra una garantía de seguro que se refiera a la conservación de los capitales o a la obtención de un interés mínimo».

Asimismo, proponemos incluir un artículo 2.º bis, con la denominación «Operaciones permitidas», del siguiente contexto: «Las entidades aseguradoras podrán efectuar operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación que consistan en administrar las inversiones y especialmente los activos representativos de las reservas de las entidades que facilitan prestaciones en caso de fallecimiento, en caso de vida o de invalidez, en los términos que establezca la legislación general sobre fondos de pensiones».

Por último, señor Presidente, pedimos la supresión del apartado 2 del artículo 3.º

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Están todos los señores portavoces impuestos del texto de esta enmienda? *(Asentimiento.)*

Hay dos soluciones, señor Ruiz Mendoza: que se presente un escrito a la Mesa firmado por todos los portavoces o que se presente un escrito a la Mesa firmado por varios portavoces y tendrá un tratamiento diferente. Lo que esta Presidencia va a hacer es dejar la discusión de los artículos 2.º y 3.º para más adelante y entrar ya en los siguientes, a fin de que a ustedes les dé tiempo para preparar este escrito; esto es lo que establece el Reglamento para las enmiendas transaccionales.

El señor ARIAS CAÑETE: Señor Presidente, nosotros

retiraríamos nuestros votos particulares a la vista de la enmienda transaccional.

El señor PRESIDENTE: De todos modos, no puedo poner a votación el artículo hasta que no se presenten esos escritos a la Mesa. Si los señores portavoces lo firman todos, entraremos en un tratamiento y, si lo firma sólo una parte, el tratamiento será diferente. Para que estén preparados, por si no hay acuerdo entre todos los portavoces, creo que dentro de una hora, aproximadamente, discutiremos los artículos 2.º y 3.º

Vamos a votar los artículos 4.º, 5.º y 6.º, que no tienen votos particulares. ¿Está la Cámara de acuerdo en que se voten agrupadamente? (Asentimiento.) Así se hace.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 157; a favor, 156; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Al artículo 7.º hay una enmienda, ya debatida, del Grupo de Cataluña al Senado.

¿Hay algún señor portavoz que quiera hacer uso de la palabra? (Pausa.)

Entonces se pone a votación la enmienda número 23 al artículo 7.º

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 156; a favor, seis; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 23.

Se pone a votación el texto del dictamen del artículo 7.º

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 158; a favor, 155; en contra, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 7.º

Artículo 8.º y 9.º Vamos a votar los artículos 8.º y 9.º conjuntamente, si la Cámara no tiene inconveniente, porque no tienen votos particulares.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 158; a favor, 156; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Artículo 10 Entramos en la discusión del artículo 10, al que existe una enmienda, la número 55, del Grupo Popular. Su portavoz tiene la palabra.

El señor ARIAS CAÑETE: Señor Presidente, anuncio que voy a defender las enmiendas números 55, 56, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 88 y 89:

Señoras y señores Senadores, las enmiendas que va-

mos a defender son el núcleo fundamental que sustenta la posición del Grupo Popular —que no de Alianza Popular— al proyecto de Ley presentado por el Gobierno en esta materia. (El señor Vicepresidente, Lizón Giner, ocupa la Presidencia.)

En primer lugar, hay un grupo de enmiendas, que son la 55, 56, 69, 70, 75 y 89, que se refieren a la filosofía que preside el proyecto en la ordenación del seguro privado.

Evidentemente, la filosofía que late en la propia Exposición de motivos —así se dice en la misma— es la de «fomentar la concentración de empresas y consiguientemente la reestructuración del sector». Ahora bien, el Senador Ruiz Navarro, perdón (Ruiz Mendoza), nos alegaba en el turno de defensa que lo que presidía fundamentalmente esta regulación de capitales, de períodos transitorios y de fondos de garantía era la actuación planificadora del Estado sobre el marco del seguro privado, así como la protección de los intereses de las empresas.

Yo llego a la conclusión de que el señor Ruiz Mendoza ha creado un nuevo modelo de reconversión. Frente al modelo Solchaga, caracterizado a juicio de nuestro Grupo por mucho ruido y pocas nueces, el modelo Ruiz Mendoza es un modelo de reconversión de poco ruido y destrucción total de las nueces. (Risas.) Me explicaré.

Efectivamente, sobre la base de proteger los intereses de los asegurados y de concentrar las empresas de seguros en pocas y de importantes capitales, el proyecto de Ley en el artículo 10 establece unos requisitos de exigencias de capital que, curiosamente, señorías, son absolutamente superiores a todo lo que tiene establecido la legislación europea.

Además, hay una primera consideración que nos hace ver que estos requisitos de capital no son necesarios en las compañías de seguros, o no son la garantía del asegurado, porque la garantía de una compañía de seguros se establece a través del margen de solvencia o del fondo de garantía o de sus reservas, pero no sólo del capital; sin embargo, en el artículo 10 se establecen unos capitales radicalmente elevados.

Nuestro Grupo ha hecho una comparación entre las dos directivas que regulan el seguro en la Comunidad Económica Europea, la de 23 de julio de 1973, en su artículo 17, y la de 5 de marzo de 1979, en su artículo 20, que establecen las cuantías que la Comunidad Económica Europea impone en los distintos ramos. Así, en el Grupo I se piden en la Comunidad Económica Europea 800.000 unidades de cuenta que vienen a equivaler a 104 millones al cambio actual; nuestro Grupo pide 250 millones y el proyecto socialista contempla 320 millones. Lo mismo ocurre en el Grupo II, donde la Comunidad Económica Europea pide 400.000 unidades de cuenta equivalentes a 52 millones, y el proyecto socialista contempla 160 millones. En el Grupo III ocurre tres cuartas de lo mismo, y en el Grupo IV, el de las empresas más pequeñas, la disfunción es todavía mayor.

En materia de reaseguros el proyecto de Ley socialista impone capitales bien fuertes. La Comunidad Económica Europea deja en libertad a las legislaciones nacionales.

Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Nos en-

contramos con que el propio Gobierno socialista, cara a la integración en la Comunidad Económica Europea, sitúa a nuestras compañías nacionales de seguros con unas exigencias de capital muy superiores a las compañías comunitarias. Y se nos dice que eso es beneficioso porque va a concentrar las empresas en unas pocas, lo cual se combina con un período transitorio de tres años que se establecen en la Disposición transitoria primera para cubrir esos capitales, que curiosamente es la mitad del plazo que han concedido los europeos a sus empresas para reestructurarse.

A nosotros nos cabe una duda muy razonable: ¿quién pretende esta reestructuración? Porque no obedece a causas políticas, sino a causas técnicas. Es a los técnicos de la Dirección General de Seguros a los que les es más cómodo controlar menos empresas. Y no se nos diga que porque haya empresas más grandes son más solventes, porque probablemente, cuando quiebra una empresa grande, los efectos negativos son más perniciosos. Acaba de crearse una «UVI» a estos efectos, aprobada por Decreto-ley de 14 de julio, y publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto, nos parece que son estos mismos técnicos, estos burócratas los que están impidiendo que haya una aproximación de posiciones entre los Grupos en un tema que no es absolutamente de contraste político sino que es de ver cuáles son los efectos sociales de una norma jurídica que se va a apoyar desde este Parlamento. Y los efectos son los que yo he dicho antes: que esto produce una reconversión, pero no de las empresas de la lista negra, como decía el Senador Ruiz Mendoza, sino de innumerables pequeñas empresas que no están en la lista negra, pero que tienen dificultades para constituir aumentos de capital a corto plazo, y esto es lo que nuestro Grupo quiere evitar con sus enmiendas.

Hay dos vías para hacerlo: la que proponemos en la enmienda 55: reducir los capitales y a nosotros incluso nos parecen bien los capitales que propone el Partido Socialista; si bien ampliamos el período transitorio. Y el período transitorio hay que ampliarlo más de esos tres años, porque no es cierto lo que dice el Senador Ruiz Mendoza de que en 1981 hubo un proyecto de Ley y que pudieron adaptarse entonces.

Ese proyecto no se transformó en nada y era una declaración de intenciones de un Gobierno que además duró bien poco desde el anuncio de ese proyecto. Por tanto, o bien se reducen los capitales para permitir que la concentración no sea tan sangrante y que las empresas sanas no tengan obligación de disolverse por imperativo legal, porque no puedan cubrir estos capitales, o bien vamos a períodos transitorios más grandes. Además, los períodos transitorios no pueden hacerse con la cicatería con que lo hace el proyecto socialista en el que la transitoriedad solamente comprende la posibilidad de cubrir el capital, pues los fondos de garantía que se establecen en el artículo 25 se imponen desde ya, con lo cual ya tienen un carácter de necesidad.

Esto es lo que yo digo que es el modelo Ruiz Mendoza: que 12.000 trabajadores de empresas sanas entren en cri-

sis, porque el modelo Solchaga, que es de empresas de defectuosa estructura económica, es una exigencia social dolorosa, pero a lo mejor comprensible. Pero en un sector que está bien financieramente, que está en una situación económica normal, imponer una reconversión salvaje con un período transitorio corto, capitales elevados y sin contemplar esas situaciones, se van a producir disfuncionalidades porque las empresas se mueven por intereses económicos. Y las grandes empresas no van a ir a la absorción de las pequeñas empresas, van a ir a la absorción parcial de cartera, que es más barato y no comporta necesariamente la absorción de cargas laborales. Todos conocen la Ley, y el que conoce la Ley conoce los resquicios que tiene la Ley, y esta Ley tiene unos resquicios en este tema y va a ocurrir así.

Este es el carácter constructivo de nuestras enmiendas, que creemos que dan una ocasión de diálogo en este momento procesal para llegar a un acuerdo que permita una adecuación pacífica del sector y no traumática o convulsiva.

La enmienda 56 pretende una clasificación de ramos distinta de la que viene en el proyecto, en el sentido de incorporar en el Grupo IV determinados conceptos que no están en el proyecto, y de eliminar el Grupo V del reaseguro, porque, efectivamente, por la Comunidad Económica Europea el reaseguro no lo contempla en el nivel de exigencias de capitales ni como un concepto aparte, sino que se les exigen los mismos requisitos que para los aseguradores directos, con carácter general.

La misma fundamentación de reducción de capitales tienen las enmiendas 69 y 70.

La enmienda número 69 se refiere a la discriminación que se opera en el Grupo IV para aquellas empresas que el artículo 10 les da una posibilidad de tener el 50 por ciento de capital cuando operen en núcleos de población de sólo dos millones de habitantes, pero no se la concede el artículo 25.

Nuestra enmienda 70 establece que las mutuas que no tienen obligación de constituir un fondo de garantía deben estar también exentas de tener el fondo mutual. El carácter lógico del precepto es claro: si en el artículo 10 se les exige a determinadas mutuas un fondo mutual y en el artículo 25 no se les exige un fondo de garantía en atención a su pequeño volumen, deberán estar igualmente exoneradas del requisito del capital social por el paralelismo técnico-jurídico que existe entre los artículos 10 y 25. Es la materia del grupo excesivamente árida y compleja, pero es evidente que estos preceptos tienen una concatenación lógica que no se observa, y nuestra enmienda trata de subsanarlo.

La misma filosofía es la de nuestra enmienda 75, que pretende que no se exija a las compañías de reaseguros el requisito de equipararse a los aseguradores directos en temas de capital social, fondo de garantía y margen de solvencia, y propone eliminar toda referencia a la legislación de transacciones exteriores, porque es obvio que las empresas que reaseguran deben cumplir las normas de control de cambios, igual que cualquier otra compañía mercantil.

La enmienda número 89 se refiere al periodo transitorio para el fondo de garantía y de capital social, solicitando que se amplíe a seis años, de acuerdo con las directrices comunitarias, o bien estaríamos abiertos a cualquier transacción razonable entre el periodo social de tres años y el de seis que proponemos, siempre que el periodo transitorio se extendiera también con carácter necesario al fondo de garantía.

Nuestra enmienda número 71 al artículo 27 pretende una ampliación de las cesiones de cartera, en el sentido de que no se les prohíba a las sociedades mutuas a prima fija y a las de prima variable para evitar lo que figura en el punto 6 del artículo 37, es decir, el supuesto de que los asegurados puedan cancelar sus pólizas, cuando haya cesiones parciales de cartera con carácter libre, antes de la finalización del plazo de las pólizas.

En este sentido, en Comisión se nos dijo que la filosofía del proyecto en el artículo 27 era que cuando había una cesión general de cartera, el asegurado no tenía que tener esta posibilidad, porque estas cesiones generales tenían lugar cuando había dificultades financieras o económicas en las empresas, y la cesión parcial era una operación distinta en la cual había que garantizar el interés del asegurado. Y yo me pregunto: Si este interés del asegurado hay que garantizarlo en la cesión parcial, ¿por qué no en la cesión general de cartera? Si el artículo 27, punto 1 del proyecto socialista permite la cesión general sin que haya rescisión anticipada de los contratos, ¿por qué imponerla con carácter necesario en el punto 6 del artículo 27?

Las enmiendas 76, 77 y 78 al artículo 38 proponen que los plenos de retención, es decir, aquellas cantidades que garantizan con sus recursos propios, de sus obligaciones, a las compañías de seguros, no quede al arbitrio del Gobierno su determinación so pretexto de formular más o menos opiniones ambiguas, sino conectar la proporcionalidad de estos plenos de retención con las bases técnicas que, según los artículos 23 y 24, son conocidos por el Ministerio de Economía y Hacienda antes de comenzar su actuación las compañías de seguros y que permitirán calibrar si la proporción de volumen de retención que hacen las aseguradoras es o no razonable.

Lo que queremos es limitar la discrecionalidad de la Administración, porque la libertad de empresa —que tanto nos alega el señor Ruiz Mendoza que invocamos, se la invocamos en este momento procesal— queda muy disminuida si, discrecionalmente, el Gobierno puede determinar en cualquier momento el pleno de retención sin referencia a ningún tipo de criterio objetivo; es una discrecionalidad excesiva.

Por último, la enmienda 88 es una enmienda cuya no admisión no entenderíamos. Propone que en materia de seguros los actos de la Administración se recurran ante la jurisdicción ordinaria, es decir, que se recurra a la vía contenciosa normal y no ante una jurisdicción especial como es el Tribunal Arbitral de Seguros. Nuestra Constitución consagra el principio de unidad jurisdiccional. Ha sido una lucha de todos los Grupos eliminar y erradicar en este país las jurisdicciones de tipo especial y parece

absurdo que en este proyecto de Ley todavía se consagre algo tan caduco como el Tribunal Arbitral de Seguros. Los propios tratadistas socialistas, como el ilustre profesor Sosa Wagner, han escrito monografías denunciando la inconstitucionalidad del mantenimiento de esta jurisdicción especial. Se nos dijo en Comisión algo absolutamente inaudito: que era un tema que se defería a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Consultado el proyecto o el borrador, como se dice en este momento, resulta que defiere otra vez el tema del Tribunal Arbitral de Seguros a una legislación posterior que habrá de fijarse. Entendemos que se pierde una oportunidad única, de no admitirse la enmienda 88 de nuestro Grupo, eliminando para siempre esta jurisdicción que produce estériles frutos, que ocasiona gastos y cuya eficacia es más que dudosa.

Con esto considero defendidas mis enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente.

Brevemente también porque ya está muy discutido este proyecto de Ley. Voy a procurar ser conciso en lo fundamental. Lo fundamental es el problema de capitales y el problema de grupos, a juicio del dicente. Se nos está manifestando constantemente que las directivas de las Comunidades Europeas no exigen esos capitales tan fuertes a las entidades aseguradoras de la Europa de detrás de nuestros Pirineos. Pues bien, es posible que no. Yo desconozco realmente si la legislación francesa es rigurosa o no con los capitales sociales de las entidades aseguradoras, pero me da la sensación de que, por ejemplo, la legislación inglesa es rigurosísima con esos capitales, porque, si no, no estaría la famosa «Lloyd» en la línea super de flotación que tiene en el campo del seguro.

Se nos ha dicho por el Senador Arias, mi querido amigo, que la solvencia de las compañías no la dan los capitales. Muy bien; pero eso es una primera parte, porque es evidente que el margen de solvencia es donde está el patrimonio de la compañía, el patrimonio constituido por las plusvalías, por las desviaciones de siniestralidad, por la reserva de seguridad, por las regularizaciones de activos y balances, por el tanto por ciento de beneficios de futuro, por el saldo acreedor de las cuentas que tienen, etcétera. Ese es el margen de solvencia. Pero lo que ha querido el legislador, además, es exigir capitales, exigir margen de solvencia, constituir el fondo de garantía que se detrae, y ésta es la única manera, a juicio del proyecto de Ley, de dar la máxima seguridad al asegurado.

A mí se me tacha por parte de mi amigo el Senador Arias, ¡pobrecillo de mí!, de destructor, pero ¿de qué? En absoluto; ni soy Solchaga, ni entiendo de industrialización, ni soy destructor de nada. Lo que me he permitido en mi vida ha sido construir algo, poca cosa, pero algo he construido, y no he destruido nada. No sé si en la guerra civil tuve alguna tentación malévolamente de destruir algo, posiblemente sí, un Estado que no me gustaba o una

sociedad que no me satisfacía. No es que me satisfaga mucho la actual sociedad, eso es lo cierto, pero la verdad sea dicha, amigo Arias, me he presentado aquí ante todos y estoy viéndome ya perseguido en Valencia o por donde esté por los empleados de seguros, que son mis amigos porque son, en definitiva, unos trabajadores como yo. Me van a perseguir y se van a creer que soy el causante de su ruina. En modo alguno, amigo Arias; lo que pasa es que, desgraciadamente, para salvar algo el barco en navegación, hay que ir tirando lastre, y vuelvo otra vez a la marinería. Para salvar el globo aerostático se tiene que tirar por la borda, incluso, si es preciso a alguno de los ocupantes de la barquilla para que ésta siga elevándose y no caiga, se aplaste y mueran todos. En definitiva, esto es a lo que se va.

En cuanto a la clasificación de los grupos, amigo Arias, ¿por qué se incluye en el grupo IV el problema o se hace una reducción de supuestos asegurados? Muy sencillo, porque tampoco la Ley debe contemplar de una manera indeterminada «y prestación de servicios». Esto es de una ambigüedad tal que el legislador ha querido concretar en cada grupo lo que era objeto y finalidad del proyecto de Ley, no esa prestación de servicios. Da la sensación de que ahí cabe todo y no es ésa, repito, la finalidad del legislador en este momento.

Se nos ha hablado —y voy a terminar con él— de la unidad de jurisdicciones. Cuando se mantiene el Tribunal Arbitral es porque en su tiempo y en el momento actual puede rendir un servicio dentro del campo del seguro, lo mismo que se ha incluido la Comisión de Conciliación. En definitiva, se trata de ver la manera de resolver, en principio y sin tener que llegar «in extremis» a la jurisdicción civil ordinaria, los problemas del campo de seguros.

Si se hubiera entendido que ese Tribunal Arbitral hubiese sido o era innecesario, tenga la seguridad, Senador Arias, de que se hubiera suprimido, pero ha dado sus frutos en la vida del seguro español. Por eso se mantiene.

Entiendo, señor Arias, que esa petición de los seis años tampoco procede. El tiempo sí es un factor, pero yo insisto en que las entidades aseguradoras estaban ya alertadas totalmente en cuanto al plazo en que se pudiesen exigir tantos aumentos de capital como los fondos necesarios para su vida.

Yo creo que la sociedad española, amigo Miguel Arias, dará un sí en el futuro a esta Ley. Y yo creo también que las compañías de seguros se concentrarán, harán lo que sea necesario para evitar el desempleo, que usted —creo yo— quiere achacarme a mí y no es así.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El voto particular de Cataluña al Senado a este artículo ha sido ya defendido.

¿Turno de portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Arias.

El señor ARIAS CAÑETE: Señor Presidente, señor Ruiz Mendoza, nosotros no hemos hecho una cuestión de gabinete del tema de los capitales. Lo que sí hemos dicho es

que, supuesto que estos capitales los considera el Grupo Socialista idóneos, vayamos a periodos transitorios más razonables, porque si no, a lo que vamos de verdad es al símil que nos ha puesto el señor Ruiz Mendoza del globo aerostático con los pasajeros tirándose por la barquilla. Desde luego, si el período transitorio es pequeño, muchos de los pasajeros se van a tirar de la barquilla, y no se lo imputo al Senador Ruiz Mendoza; se lo imputo a los técnicos que han elaborado este proyecto de Ley, que no consideran los efectos sociales del mismo. En la Memoria del proyecto, a diferencia de otros anteriores, no se evalúan las destrucciones de puestos de trabajo y las reducciones de empresas, con lo cual hay que hacer cálculos aproximativos y yo digo que puede ser uno de los efectos. Desde luego usted no será el padre de la criatura. Evidentemente.

En cuanto al Grupo IV, nuestra diferencia fundamental con el proyecto socialista es que en este grupo comprendemos los seguros del ala robos, cristales y una serie de daños menores a las cosas, porque el Grupo IV es el que tiene menos exigencias económicas de capital. En cambio, en la formulación que hace el proyecto de Ley socialista, en el artículo 10 estos riesgos menores se incluyen en el Grupo III con mayor exigencia de capital.

Una vez más nos aproximamos a la legislación comunitaria, que es poco impositiva en materia de cifras mínimas de capital. Yo creo que la legislación inglesa no pone cifras de capital. La solvencia de la «Lloyd» y su posición privilegiada en el mercado mundial de seguros se la da precisamente la planificación interna de una sociedad que hace honor siempre a los siniestros con rapidez y con eficacia, en base a su propia política de seguros o de reaseguros, fundamentalmente. Y no se trata de que el capital garantice la solvencia; se trata de una regulación estricta de los planes de retención de los reaseguros y de los Fondos de Garantía.

Por tanto, Senador Ruizste grupo comprendemos los seguros del ala robos, cristales y una serie de daños menores a las cosas, porque el Grupo IV es el posible llegar a un acuerdo que permita hacer la reconversión del sector en los términos de flexibilidad que a nosotros nos hubiera gustado. Ustedes van a una reestructuración limitada, que dicen que la sociedad va a aplaudir. Ya lo veremos. Yo, por lo menos, apunto una cierta dosis de escepticismo y de duda en este momento.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Señor Presidente, contestando al Senador Arias, yo creo que no hay trauma aquí de ninguna naturaleza. En la economía del campo asegurador no creo que se produzcan traumas, como si se tratase de grandes procesos industriales. El campo del seguro es, evidentemente, elevadísimo, pero está suficientemente basado en el buen deseo tanto de las entidades aseguradoras como de mutualistas y agentes de seguros, elementos importantes de la producción en este campo.

dispuestos a luchar y a trabajar para el seguro español, para que ocupe un sitio digno y serio, para que sea un seguro serio. Estoy convencido de que todos los hombres que están en el seguro español están deseando esta reordenación, esta ordenación sensata y este saneamiento económico. Y para ese saneamiento económico, amigo Arias, no hay más remedio que hacer cierta cirugía, no estética, sino vital.

Nada más, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Vamos a votar, en primer lugar, las dos enmiendas del Grupo Popular al artículo 10, que supongo que el señor Arias no tendrá inconveniente en que se voten agrupadamente. (Asentimiento.)

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 170; a favor, 34; en contra, 133; abstenciones, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Rechazadas.

Vamos a votar la enmienda número 24, del Grupo Cataluña al Senado a este mismo artículo 10.

El señor Secretario, al término de esta votación hará un recuento, pues se ha encendido una luz que parece indicar que el marcador no funciona bien.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 157; a favor, siete; en contra, 150.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Rechazada la enmienda número 24, del Grupo Cataluña al Senado.

Vamos a votar el artículo 10 según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 157; a favor, 124; en contra, 33.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda aprobado.

Pasamos a la discusión del artículo 11, que no tiene enmiendas, por lo que vamos a proceder directamente a su votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 164; a favor, 161; en contra, tres.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda aprobado.

Pasamos a debatir el artículo 12.

Voto particular del Grupo Parlamentario Popular. Según la nota que tengo aquí, va a intervenir el señor de la Sierra, que defenderá conjuntamente las enmiendas 58,

61, 62, 65, 91 y 98. ¿Es así? (Pausa.) Tiene la palabra el señor de la Sierra.

El señor DE LA SIERRA HERRERA: Quiero decir que la enmienda 98, que es la última de la relación que ha leído el señor Vicepresidente, la voy a retirar. Defenderé conjuntamente las cinco enmiendas que ha citado en primer lugar.

En el artículo 12 se pide que el plazo de cinco años que se exige en la Ley para que las compañías extranjeras puedan ejercer sus actividades en España con respecto a los ramos, sea en el ramo en que van a iniciar dicha actividad. Nosotros proponemos que se suprima ese plazo de cinco años, pero que se establezca un plazo previo siempre determinado por el principio de la reciprocidad. Nos basamos en que todo lo que se haga en beneficio de esta suavización de un proteccionismo es muy conveniente en estos momentos en que se está negociando con la Comunidad Económica Europea.

Para fundamentar esto quiero recurrir a un hecho concreto. Supongamos que en una compañía de seguros determinada se produce una nueva cobertura, lo cual se está produciendo con cierta frecuencia, ¿qué va a pasar en ese caso? Que la compañía española podrá empezar a trabajar en esa nueva cobertura al día siguiente, y la compañía extranjera habrá de esperar cinco años. ¿Por qué? Porque en su país de origen no existía esa nueva cobertura y no tiene entonces los cinco años de antigüedad exigidos.

En cuanto a las enmiendas 61 y 62, proponemos que en las agrupaciones mutuas se elimine la denominación de clasificación de prima fija y prima variable, porque la consideramos impropio y muy poco exacta.

El término de «prima fija» se contradice totalmente con otro apartado del mismo artículo, la letra e), en que se dice que los resultados de cada ejercicio determinarán una derrama que se unirá a la prima inicial y compondrá el total de la prima. Luego si la prima que anticipe no va a ser la definitiva, sino que está en función de los resultados de la denominación de prima fija, es totalmente incorrecto.

Es un detalle aparentemente semántico, pero que tiene su importancia y que adquiere aún más cuando en el artículo 124 del Código de Comercio se precisa que las compañías mutuas de seguros contra incendios, de combinaciones tontinas sobre la vida para auxilios a la vejez, y de cualquiera otra clase, y las cooperativas de producción, de crédito o de consumo, sólo se considerarán mercantiles, y quedarán sujetas a las disposiciones de este Código, cuando se dedicaren a actos de comercio extraños a la mutualidad o se convirtieren en sociedades a prima fija. Luego tenemos la antinomia de que esas sociedades, según el Código de Comercio, van a ser mercantiles, y según la Ley que vamos a aprobar, no van a poder ejercer las actividades mercantiles, puesto que se excluye el ánimo de lucro.

Esta contradicción es tan flagrante —sobre todo cuando en las Disposiciones derogatorias no figura ese precepto del artículo 124 del Código de Comercio— que me-

rece que el Grupo Socialista reflexione para ver si puede ser aceptada esta enmienda.

Lo mismo que estoy diciendo para la enmienda 61 es válido para la 62. Las primas que llaman «variables» es porque no hay un anticipo de prima, sino que es solamente al final cuando se produce la derrama, pero el resultado es el mismo, el total es igual, la prima no es más fija ni variable la del artículo 14 que la del 13.

La enmienda 65, al artículo 22.1, se refiere a la publicidad, y digo seriamente y sin la menor reticencia ni ironía que me extraña un poco que no haya sido admitida esta enmienda. En el artículo se establece que el Estado podrá controlar la publicidad de las compañías de seguros, y es verdad que la debe controlar, pero ¿por qué sólo de las compañías de seguros? Creo que para controlar la publicidad no se puede hacer tan a la ligera; hay que rectificar una Ley de publicidad que no deje al arbitrio de una persona de la Administración el control, haciendo mangas y capirotes de la publicidad de un determinado sector.

Dije en la Comisión que esto me recordaba tristemente aquellos censores tan denostados (más denostados por su Grupo que por el nuestro), que disponían de unas tijeras con las cuales cortaban donde les parecía que debían cortar sin ninguna normativa legal. Estamos reproduciendo exactamente lo mismo, señorías, estamos volviendo al mismo caso, y se me dijo: «No, es que estos censores» —no les llamaron censores— «van a ser nombrados por Decreto». Y qué más da que se les nombre por Decreto o por Real Orden si luego las Cortes no los van a hacer por Decreto o por Real Orden; si pueden en realidad cortar arbitrariamente de forma indiscriminada, o incluso de forma discriminatoria, que sería todavía más grave.

Señorías, es un tema grave que puede afectar al ramo de los seguros si se aplica arbitrariamente, y que nuestra obligación es legislarlo. Nos pagan para legislar, pero legislemos donde debemos y como debemos.

La enmienda número 89, a la Disposición transitoria cuarta, primera, se refiere al plazo de seis años que solicitamos, en vez de los tres que figuran en la Ley. No voy a hacer perder un tiempo inútil, puesto que doy por reproducidos los argumentos de mi compañero el Senador Arias Cañete, y como he retirado la 98, es todo cuanto tengo que decir en la defensa de estas enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): El Senador Ruiz Mendoza tiene la palabra para turno en contra.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente, es gozoso escuchar los razonamientos del amigo Sierra, que, evidentemente, le da un tinte de humor burlesco.

Estoy en contra de las enmiendas que ha defendido. Habla de primas anticipadas y no primas fijas, y tenga en cuenta, amigo Sierra, que estamos en presencia de los seguros mutuos, entidades con unas características mer-

cantiles, y que esto comprende ni más ni menos que dos contratos: uno, el que llamaríamos propiamente asegurador de seguros, y otro de sociedades. Por eso se da la circunstancia de utilizar en el proyecto la expresión «derrama activa». Es decir, hay una prima, hay un precio anticipado, una cantidad anticipada en este tipo de mutuas aseguradoras, y luego está la segunda frase, que es cuando se producen los pasivos, y entonces, en virtud de ese contrato puramente de sociedades, se produce la derrama entre los asociados. Ese es el motivo de que se hable de primas fijas, no hay otro.

Ha hablado de la publicidad. La publicidad, en definitiva, está recogida en la Ley del año 1954. Se hace referencia a la publicidad y se mantiene aquí el criterio de un no diremos intervencionismo, pero sí de una fiscalización de la publicidad, porque lo que no se puede hacer en modo alguno por parte de un Gobierno serio es permitir —y voy a citar un nombre porque ya ha pasado a la historia, desgraciadamente— una publicidad desordenada, monstruosa a costa de los asegurados, y voy a hacer la mención del nombre, es Sofico. Aquella fue una publicidad exorbitante: «ofrecemos y damos el 13 por ciento, y aquí y allá». Y, señores, ¿qué sucedió después de esa publicidad que, evidentemente —defectos del capitalismo americano; la publicidad es muy americana—, nos induce al ciudadano corriente y moliente a picar tras la misma y tras un constante lavado de cerebro, en vallas, en carteles, y hoy día en la televisión, como decía S. S., estatal? Por tanto, hay que regular y hay que fiscalizar también esa publicidad y creo que esto es algo positivo que se ha introducido en el proyecto y que se mantiene con relación a la Ley de 1954.

No hablemos del tiempo, porque el tiempo pasó, en cuanto a los cinco años. Sería insistir tontamente en el tema, ya que lo tenemos superdebatido.

Nada más, amigo Sierra.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Sierra.

El señor DE LA SIERRA HERRERA: Gracias, señor Presidente, voy a ser brevísimo.

El señor Ruiz Mendoza ha empleado la palabra «anticipada», que es la que propugnamos nosotros precisamente, y me ha dicho que eso corresponde al contrato y lo otro corresponde al seguro, pero de lo que no cabe duda es de que al final del período se suma, y es una cantidad variable según el riesgo efectivo; es decir, es una prima variable en este caso y en el del que llaman fija.

En cuanto a la publicidad, dice que está perfectamente recogida. Entonces, ¿para qué insistir? Hay que controlar todas las publicidades. Me ha hablado del caso concreto de Sofico, que en realidad no era un seguro, era una inversión inmobiliaria. Recuerde el señor Ruiz Mendoza que yo también en la Comisión me referí a que no sólo había que regular la publicidad en los seguros, y creo que cite la farmacia, en que a veces se dan casos de

abuso de publicidad; cité la alimentación, en que a veces hay cosas que se dicen y que no son ciertas, y en que, además, se abusa del anuncio, y cité las inversiones, y también estaba pensando en algo parecido a eso. También podríamos pensar en la publicidad de los bonos que hace el Estado, que también puede ser abusiva. En todo caso, insisto en que si está legislado y eso no es suficiente, reformemos la Ley, pero no demos atribuciones para que una persona nombrada pueda controlar la publicidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Únicamente, señor Presidente, con su venia, para hacer una mención sobre los bonos. No me compare S. S. los bonos del Estado, con la garantía de todos nosotros, los presentes y los millones de ciudadanos que ocupan todo el área de España, no me los compare con esas cuestiones publicitarias de otras entidades.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Vamos a votar, señorías.

Votamos la enmienda del Grupo Popular al artículo 12, que es la número 58.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 143; a favor, 20; en contra, 122; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda rechazada la enmienda número 58.

Hay un voto particular del Grupo Cataluña al Senado, que se corresponde con la enmienda número 25, y que ponemos a votación.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 145; a favor, 24; en contra, 121.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda rechazado el voto particular.

Vamos a votar el artículo 12 según el texto del dictamen.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 146; a favor, 121; en contra, 24; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Queda aprobado el artículo 12 según el texto del dictamen.

Abran las puertas, porque ha transcurrido ya el tiempo y vamos a retroceder a la votación de la enmienda transaccional y de los artículos 2.º y 3.º, que quedaban por votar del texto del dictamen.

Cierren las puertas, por favor.

Supongo innecesario volver a leer a SS. SS. las enmiendas transaccionales. Propongo también que se aprueben por asentimiento, va que la firman los señores portavoces. *(Pausa.)*

Quedan aprobadas por asentimiento las enmiendas transaccionales, que se incorporarán al texto de la Ley.

Vamos a votar, si les parece, conjuntamente los artículos 2.º y 3.º del texto del dictamen, con la modificación de las enmiendas transaccionales.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, 147; en contra, uno.

El señor VICEPRESIDENTE (Lizón Giner): Quedan aprobados los artículos 2.º y 3.º

Iniciamos la discusión del Capítulo III, artículo 13.

Artículo 13

Queda pendiente de defensa en este artículo tan sólo un voto particular del Grupo de Senadores Nacionoanlistas Vascos, que, según me ha comunicado el señor Secretario, van a defender conjuntamente los votos particulares, ¿o van a defender este sólo? *(Pausa.)*

Les comunico a SS. SS. que vamos a entrar en votación continuada casi a partir de este momento.

El señor portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra.

El señor ZAVALA ALCIBAR-JAUREGUI: Señor Presidente, señorías, voy a hacer una defensa global de todas las enmiendas del Grupo de Senadores Vascos. Se han retirado dos enmiendas, la 111 y la 119, y mi defensa global va a concretarse principalmente a unas enmiendas que estimamos más importantes.

Estas enmiendas, que tienen ese matiz más generalizado, se refieren a la parte que he calificado como mala de este proyecto de Ley; a ver si logramos que no sea tan mala, pero me temo que no conseguiremos el objetivo.

La enmienda 105, que se refiere a la supresión del Capítulo IV, es coincidente con la del Senador Oliveras. Estimamos que debe ser suprimido este Capítulo IV porque en él se trata de regular a las Mutualidades de Previsión Social cuya función no es precisamente mercantil. El seguro mercantil responde a un fin económico de garantía, por un lado, y de lucro, por otro, y se realiza, en general, por grandes masas de seguros que dan lugar a unas, más o menos, potentes empresas.

Las Mutualidades de Previsión ni son unas grandes empresas ni tampoco tienen la finalidad del lucro, sino que están más bien centradas, enmarcadas dentro de un servicio benéfico-social, encaminadas a proteger a sus miembros y a sus bienes contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito y previsible, como dice el artículo 16 de este proyecto de Ley.

Por lo demás, en esta enmienda 105 hacemos nuestra toda la argumentación que tan brillantemente ha expuesto el Senador Oliveras.

En la enmienda número 112 decimos que es preciso concretar qué normas son las aplicables dentro de cada

capítulo que se cita en el artículo 18.2, evitando de esta forma que las Mutualidades de Previsión Social se vean abocadas a tratar de cumplir una normativa mercantil que les resulta ajena, ya que, como dice la exposición al informe de la Ponencia, es una Ley cuyo objeto es precisamente la ordenación del seguro privado, pero que, al mismo tiempo, tenga en cuenta las peculiaridades de estas asociaciones, Mutualidades de Previsión Social, que las alejan del régimen general de las entidades mercantiles que actúan en este sector. Hasta aquí la exposición al informe de la Ponencia.

Por este motivo se propone que los artículos y capítulo que a continuación se indican no sean de aplicación a las entidades de previsión social, dejando, en su caso, al reglamento que ha de dictarse la regulación de materias similares. Así, en el artículo 23 las Mutualidades de Previsión Social no tienen pólizas, ni primas ni documentación similar a las compañías de seguros y, consecuentemente, no pueden ajustarse a la Ley del Contrato de Seguro. En el artículo 27 es impensable una cesión de cartera en este tipo de entidades. En el Capítulo VII, protección del asegurado, la redacción excluye a las mutualidades con sus asociados, que no son propiamente de aseguramiento; la constitución de las mismas se produce por los propios asociados, con el fin de protegerse a ellos mismos o a sus bienes contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito y previsible.

Por lo que se refiere al Capítulo IX, conviene declararlo de aplicación general, pero hacer la advertencia legal de su adecuación a las entidades de previsión social, con especial referencia a la graduación de las sanciones. Piénsese que, conforme al artículo 19 del proyecto de Ley, las entidades con una recaudación anual inferior a los cinco millones de pesetas deberán acreditar un fondo mutual de 100.000 pesetas, y que el artículo 44 establece una sanción para las faltas leves, que puede llegar a la misma cantidad.

La enmienda 117 se refiere al artículo 27.2. Nuestra enmienda es de sustitución al apartado 2, y dice así: «La cesión general de uno o más ramos y las cesiones parciales de la cartera de un ramo, requerirán de autorización del Ministerio de Hacienda, previa información pública o audiencia personal administrativa de los asegurados, según se acuerde en cada supuesto, en la que éstos podrán expresar, en su caso, las razones de su disconformidad».

Pretendemos con esta enmienda proteger al asegurado, a quien se le debe conceder en estos casos el derecho de rescisión por tratarse de la modificación de un elemento sustancial del contrato, cual es el elemento objetivo.

Sin embargo, el derecho de rescisión no debe situar al cesionario en una grave inseguridad jurídica. Por ello, el texto de nuestra enmienda exige que se haya manifestado la voluntad de rescindir con anterioridad al momento de autorización de la cesión.

El escaso volumen de ciertas cesiones parciales aconseja, por otro lado, sustituir la información pública por la audiencia personal administrativa de los asegurados. Algunos principios establecidos en el proyecto (margen de solvencia de la cesionaria formalización) son respetados

en el texto propuesto, aunque se sitúa en diferente lugar por imperativos de sistemática.

La enmienda 122 es de sustitución al artículo 39.2. Este artículo se refiere a las competencias que en materia de seguros privados tienen las Comunidades Autónomas de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos de Autonomía. Estas competencias se limitan al desarrollo legislativo y a la ejecución, dentro de su territorio, de las bases de ordenación de los seguros privados de esta Ley y las condiciones básicas que la complementan, respecto a las entidades de seguro directo cuyo domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos que aseguren se limiten a los territorios de la Comunidad, según el artículo 39.2 del proyecto. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*) Conforme a este precepto legal, las facultades que competen a las Comunidades Autónomas, que según sus Estatutos las tienen, son muy reducidas y, además, limitadas a su ámbito territorial y que la localización de los riesgos que aseguren no esté necesariamente ubicada dentro de dicho territorio.

Ya hemos visto antes, al hablar en el turno de portavoces el inicio de este debate, la gravedad que supone que esté localizado el riesgo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma respectiva. Nosotros proponemos en esta enmienda delimitar y, por consiguiente, clarificar las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, por no ser preceptos básicos, que esto nunca corresponde a las Comunidades Autónomas) y tratamos de clarificar estas competencias no en su globalidad, sino en su concreción.

Por ello, nuestra enmienda, después de señalar que a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia les corresponderá el desarrollo normativo y la ejecución, de conformidad con las normas que le atribuyen las competencias en materia de seguros, comprendiendo la potestad reglamentaria y la potestad administrativa, establecemos dos criterios generales de delimitación de competencias y de otorgamiento de eficacia de actuación de los entes públicos, y son el criterio de la sede social y el criterio de la actividad.

La actuación pública relacionada con la situación estructural o institucional de las entidades aseguradoras debe ser atribuida a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio radique la sede social de la entidad aseguradora. Este es el criterio de la sede social.

El criterio de la actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras orientada hacia el mercado de los seguros y de las actividades externas de tales entidades debe ser atribuida al ente en cuyo territorio se ejerza esta actividad; es decir, cuando una Comunidad Autónoma tenga competencia en relación con esta materia, la tendrá atribuida respecto a las entidades y demás personas que actúen en su ámbito territorial, con independencia de que su sede social pertenezca o no a este ámbito territorial.

Por fin, la enmienda 123 al artículo 39.3 propone una redacción que quedaría así: «En cuanto a las Sociedades Mutuas y Cooperativas de Seguros, así como a los Montepíos o Mutualidades de Previsión Social no integrados

en...», etcétera. Y esto, según preceptúa el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Euzkadi o País Vasco, es competencia exclusiva de dicha Comunidad en lo referente a cooperativas y mutualidades no integradas en la Seguridad Social y pósitos, conforme a la legislación general en materia mercantil.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)

El señor Ruiz Mendoza tiene la palabra.

El señor RUIZ MENDOZA: Si se me permite, contestaré desde este mismo escaño, porque voy a ser brevísimo.

El señor PRESIDENTE: Está en su derecho, señor Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: En cuanto a la enmienda 105, que ha presentado el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre supresión del capítulo IV, doy por reproducido lo dicho cuando se contestó a la enmienda 26, del Grupo de Cataluña al Senado.

Las enmiendas defendidas por el amigo Zavala, con excepción de la 122, que tiene su trascendencia, entiendo que son de modificaciones no sustanciales y que no afectan al fondo del proyecto de Ley. Por tanto, entiendo que no ha lugar por esta parte a dar una contestación sucinta ni extensa a cada una de ellas.

Ahora bien, sí tiene trascendencia la enmienda número 122, que es interesante —ya se lo dije en Comisión— muy bien elaborado, evidentemente, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y están estudiadas detenidamente, en cuanto a actividad y sede social, esas características y esas divisiones de criterio que se exponen en la enmienda.

No obstante, entiende este Grupo y el dicente que no por extensión de la enmienda, sino por la serie de conceptos que se vierten en la misma, es tanto como entrar en el campo del derecho del Estado a legislar en la materia, y esto puede quedar evidentemente reservado para el Parlamento vasco, para los Parlamentos comunitarios, para dedicar y extenderse en las competencias que puedan ser exclusivas de cada uno de los parlamentarios comunitarios, pero no para incluirlos en esta Ley. Incluso hay cuestiones, amigo Zavala, que, a mi juicio personal, son de tipo reglamentario.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Entramos en votación, ya que nadie pide la palabra. Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda número 61, del Grupo Popular, a este artículo 13.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, 22; en contra, 124; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 103, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 147; a favor, seis; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, 120; en contra, 27; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Al artículo 14 hay una enmienda del Grupo Popular, la número 62, que sometemos a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, 24; en contra, 123; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, 124; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El artículo 15 no tiene enmiendas. Entramos en la votación directa del mismo.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, 147; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Artículo 16. En primer lugar están las enmiendas del Grupo Cataluña al Senado. ¿Se votan conjuntamente, señor Oliveras?

El señor OLIVERAS I TERRADAS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Iniciamos la votación de todas las enmiendas del Grupo Cataluña al Senado al artículo 16.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, seis; en contra, 140; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Existen varios votos particulares del Grupo de Senado-

res Nacionalistas Vascos. ¿Se votan conjuntamente, señor Zavala? (Asentimiento.)

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 146; a favor, seis; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados. Votamos el texto del dictamen. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 146; a favor, 140; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El artículo 17 tiene diversas enmiendas del Grupo Cataluña al Senado, las números 29, 30 y 31. ¿Se votan conjuntamente, señor Oliveras? (Asentimiento.) Pasamos a votarlas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 148; a favor, siete; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Los Senadores nacionalistas vascos tienen las enmiendas 110 y 111. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.)

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 145; a favor, seis; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el texto del dictamen. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 147; a favor, 141; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Al artículo 18, el Grupo Cataluña al Senado tiene las enmiendas 32 y 33.

Señores Senadores, por economía de tiempo votare siempre las enmiendas agrupadamente, salvo que al llegar a un artículo determinado se me pida que la votación no sea así.

Se votan agrupadamente las enmiendas 32 y 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 149; a favor, seis; en contra, 142; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación votamos la enmienda número 112, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 156; a favor, seis; en contra, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos el texto del dictamen. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 147; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Artículo 19. Votamos el voto particular del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, enmienda número 19. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, seis; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votamos el texto del dictamen. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 147; en contra, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Artículo 20. Votos particulares de Cataluña al Senado, correspondientes a las enmiendas 34 y 35. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, siete; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votos particulares del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondientes a las enmiendas 20 y 115. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 152; a favor, seis; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votamos el texto del dictamen. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 151; a favor 145; en contra, cinco; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Artículo 21. Votos particulares del Grupo Cataluña al Senado, correspondientes a las enmiendas 36 y 37. Se inicia la votación de estas enmiendas. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 151; a favor, cinco; en contra, 145; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 152; a favor, 146; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 22. Votamos, en primer lugar, el voto particular del Grupo Popular, que se corresponde con la enmienda 65.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 23; en contra, 129; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, se pone a votación el voto particular del Grupo de Cataluña al Senado, que se corresponde con la enmienda número 38.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 150; a favor, seis; en contra, 143; abstención, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se pone a votación el texto del dictamen del artículo 22.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 151; a favor, 124; en contra, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El artículo 23 tiene dos votos particulares del Grupo de Cataluña al Senado, que se corresponden con las enmiendas 39 y 40.

Se inicia su votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 151; a favor, 28; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 151; a favor, 145; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 24, que no tiene enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 151; a favor, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El artículo 25 tiene dos votos particulares, del Grupo Popular, que se corresponden con las enmiendas 69 y 70.

Se inicia la votación de estas enmiendas. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 151; a favor, 22; en contra, 123; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se pone a votación el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 152; a favor, 129; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 26, que no tiene enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 152; en contra, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 27. En este artículo hay dos votos particulares del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Votamos a continuación las enmiendas 117 y 120, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 158; a favor, seis; en contra, 152.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 158; a favor, 24; en contra, 128; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 27 según el dictamen de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 125; en contra, 30.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos agrupadamente los artículos 28, 29 y 30, que no tienen formulados votos particulares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 158; a favor, 158.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
El artículo 31 tiene un voto particular correspondiente a la enmienda número 121, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Votamos a continuación dicha enmienda.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 156; a favor, cinco; en contra, 150; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 157; a favor, 151; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Los artículos 32, 33, 34, 35 y 36, que no tienen enmiendas, podrían votarse conjuntamente, salvo que haya inconveniente por parte de la Cámara. *(Pausa.)* Gracias.
En consecuencia, votamos los artículos 32, 33, 34, 35 y 36.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 154.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
En el artículo 37 existe una enmienda del Grupo Popular, la número 75, elevada a voto particular.
Se inicia su votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 24; en contra, 125; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 152; a favor, 128; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 38 se han formulado tres votos particulares, del Grupo Popular, correspondientes a las enmiendas 76, 77 y 78, que votamos conjuntamente.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 24; en contra, 125; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a la votación del texto del dictamen.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 130; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

El artículo 39 tiene los votos particulares correspondientes a las enmiendas 41 y 42, del Grupo Cataluña al Senado, que votamos conjuntamente.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, seis; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Asimismo, tenemos las enmiendas 122 y 123, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que votamos conjuntamente.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, seis; en contra, 149.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 144; en contra, ocho; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos agrupadamente a continuación los artículos 40, 41, 42 y 43, que no tienen votos particulares.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 153; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 44. Este artículo tiene un voto particular del Grupo Cataluña al Senado, correspondiente a la enmienda número 43.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 157; a favor, 29; en contra, 128.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el texto del dictamen del artículo 44.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 125; en contra, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El artículo 45 no tiene votos particulares.
Se inicia su votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 152; en contra, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 46, que no tiene votos particulares.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 153; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos la enmienda número 44, de adición, del Grupo Cataluña al Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 31; en contra, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El artículo 47 tiene un voto particular, el número 1, del Grupo Cataluña al Senado, que se corresponde con la enmienda número 45.
Se inicia su votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 30; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 149; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos conjuntamente los artículos 48 y 49, que no tienen votos particulares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 153.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las Disposiciones finales. La primera tiene un voto particular del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que se corresponde con la enmienda 124.
Se inicia su votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, siete; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 148; en contra, seis; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos las Disposiciones finales segunda y tercera que no tienen votos particulares.
Se inicia su votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 153; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

La Disposición final cuarta tiene, en primer lugar, el voto particular de Cataluña al Senado, correspondiente a la enmienda 46.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 30; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, la enmienda 125, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, seis; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 148; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposición final quinta. Voto particular del Grupo Cataluña al Senado, correspondiente a la enmienda 47.

Se inicia su votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 152; a favor, 31; en contra, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 149; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Las Disposiciones finales sexta, séptima y octava no tienen votos particulares, por lo que se procede a su votación directamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 153; a favor, 153.

El señor PRESIDENTE: Aprobadas.
Votamos una enmienda de adición del Grupo Cataluña al Senado, la número 48.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, seis; en contra 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 88, del Grupo Popular, también de adición.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 24; en contra, 125; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada también.

Entramos en las Disposiciones transitorias. La primera tiene un voto particular correspondiente a la enmienda número 50, del Grupo Cataluña al Senado.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 29; en contra, 125.

El señor PRESIDENTE: Rechazada.

Asimismo, la Disposición transitoria primera tiene un voto particular, del Grupo Popular, que se corresponde con la enmienda número 89.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 155; a favor, 24; en contra, 125; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Rechazada.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 152; a favor, 122; en contra, 30.

El señor PRESIDENTE: Aprobado.

Las Disposiciones transitorias segunda y tercera no tienen votos particulares. Se votan conjuntamente.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 154.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

La Disposición transitoria cuarta tiene un voto particular, del Grupo Parlamentario Popular, correspondiente a la enmienda 91.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 24; en contra, 124; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 154; a favor, 130; en contra, 23; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Vamos a votar conjuntamente las Disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava y las Disposiciones adicionales primera y segunda, que no tienen votos particulares.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 156; a favor, 155; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Entramos en la Disposición adicional tercera, que tiene varios votos particulares del señor Bajo Fanlo, correspondientes a las enmiendas 131, 132, 128, 129 y 130.

Señor Bajo Fanlo, ¿va a defenderlas conjuntamente?

El señor BAJO FANLO: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

El señor BAJO FANLO: Después del tono distendido que ha presidido las intervenciones de los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, sobre todo las de los señores Sierra y Ruiz Mendoza con sus referencias a las próximas vacaciones, a la mar y a los cambios del timón, pienso que vamos a seguir en ese mismo tono de distensión y estoy convencido de que también mis enmiendas van a merecer ese cauce de aceptación que han tenido algunas de las que aquí se han propuesto. Y creo que, efectivamente, terminaremos con unos abrazos amigables de satisfacción.

Con mis enmiendas, y desde la perspectiva de un modesto agente de seguros, trato de perfeccionar la Disposición adicional tercera en su número 1, sin querer atribuirme ningún mérito personal, ya que en la misma se recogen preceptos que estaban incluidos en el Capítulo VIII del proyecto de 5 de junio de 1981, que fue enmendado por el Partido Socialista, en el sentido de que se procediera a su supresión y se incluyera una Disposición adicional tercera bis del siguiente tenor: «Los preceptos que a continuación se indican de la Ley 117/69, de 30 de diciembre, tendrán la siguiente redacción:». Y entre esos preceptos que el Partido Socialista reconocía en aquel momento que debían figurar en la Ley, aparecen de una forma casi literal las enmiendas que hoy propongo, y aparecieron también estas enmiendas en la primera redacción del actual proyecto, pero luego no sabemos por qué desaparecieron del definitivo al suprimirse el Capítulo VIII, sin duda, pensamos, siguiendo el criterio de las enmiendas del Partido Socialista, a las que he hecho referencia con anterioridad, pero probablemente por un lapsus no se recogieron estos preceptos conforme propugnaba la Disposición adicional propuesta por el Partido Socialista.

En Comisión se me dijo por el portavoz del Grupo mayoritario que en el fondo estaban de acuerdo con mis enmiendas (y no podía ser, me parece a mí, de otra forma, porque ellos mismos las habían propuesto en su día).

pero que no podían aceptarlas por considerar que eran de carácter reglamentario.

Me voy a permitir insistir en que estos preceptos que trato de incluir al modificar en algunos aspectos de fondo la regulación de la Ley 117, de 1969, sobre producción de seguros, de no consignarse ahora en la redacción actual del proyecto tampoco se podrán recoger, al menos en mi opinión, en el texto refundido que después debe confeccionarse en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional tercera, número 2, ni en el Reglamento previsto en el número 1 de la Disposición final sexta. Por todo ello voy a tratar de exponer muy brevemente los argumentos que fundamentan mi opinión.

Con mi enmienda número 128 se propone añadir el siguiente epígrafe: «Los corredores y los agentes de seguros titulados, bajo su responsabilidad, podrán utilizar los servicios de subagentes, que colaboren con ellos en la producción y mediación de seguros, sin tener la condición de agente o corredor, pero con idénticas incompatibilidades». ¿Qué es lo que se dice en la Ley 117, de 1969, en su artículo 12? Lo siguiente: «Los agentes de seguros, bajo su responsabilidad, podrán utilizar los servicios de subagentes que con ellos colaboren en la producción...», etcétera.

Efectivamente, vemos que nuestra enmienda modifica en el fondo el artículo 12 de la Ley de 1969 al requerir, para poder utilizar subagentes, que los agentes hayan obtenido el título, mientras que dicha Ley de 1969 lo permite a todos los agentes sin distinción alguna. Por ello, a mi modo de ver, no podrá ir este condicionamiento en el texto refundido y menos en el Reglamento, si no se incluye en este nuevo texto legal.

Es lógico que si, además de asumir la responsabilidad propia, se asume también la de otros colaboradores subagentes, se deben acreditar unos conocimientos adecuados. Todo ello estamos convencidos que será siempre en beneficio de los asegurados, ya que con esto, desde luego, no es que se pretenda crear ningún privilegio de clase, porque el título de agente se puede obtener por todos los agentes, bien porque tengan algunos de los títulos académicos que el Reglamento señala, como son los de actuario, licenciado o diplomado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en cualquiera de sus secciones, profesores mercantiles y diplomados en la Escuela Profesional de Seguros, o bien por superar las pruebas que periódicamente convoca el Ministerio de Economía y Hacienda, y también en la actualidad superando el curso superior que imparte el Centro de Estudios del Colegio Nacional en Barcelona y Madrid.

En mi enmienda número 129 propongo añadir el siguiente epígrafe: «El contrato de agencias de seguros se consignará por escrito; se entenderá celebrado en consideración a las personas contratantes, con recíproco deber de lealtad, y sólo podrá ser modificado de mutuo acuerdo o rescindido por justa causa, reglamentariamente determinada». El artículo 17 de la Ley en vigor de 1969 dice lo siguiente: «El contrato de agencias de seguros tendrá siempre carácter mercantil, se consignará por escrito y se entenderá celebrado en consideración a las personas

contratantes con carácter recíproco de lealtad». Me parece que es innecesario fundamentar la razón de la modificación propuesta, ya que en una relación bilateral no puede una de las partes por sí sola introducir modificaciones por ir contra el principio de seguridad jurídica. Pero, desgraciadamente, hay que reconocer que, en la práctica, algunas entidades aseguradoras, prevaleciendo de su fuerte posición, pretenden introducir modificaciones unilaterales en sus relaciones con los agentes.

En cuanto a que la rescisión se produzca por justa causa, como nosotros proponemos, parecería innecesario consignarlo, pero resulta preciso porque, al amparo indebido de la letra f) del punto 2 del artículo 17 de la citada Ley, se señala que en el contrato de agencias se determinarán las causas especiales de extinción y efectos que producirán en relación con los derechos del agente sobre la cartera.

Se ha introducido, por desgracia, la práctica viciosa de atribuir a la entidad aseguradora la libre rescisión del contrato en cualquier momento, sin alegar causa alguna, exclusivamente con un preaviso, que suele ser normalmente muy corto, a veces de quince días, lo cual supone la más absoluta inseguridad jurídica para los agentes que después de muchos años de colaboración con una entidad, por cualesquiera razones, y siempre olvidando el respeto a la persona, se encuentran súbitamente con la rescisión de sus contratos, a veces por razones incomprensibles.

El precepto precisa la naturaleza y contenido del contrato de agencias que, por venir definido en el artículo 17 que antes he leído, debe quedar incorporado a la nueva Ley para que en el texto refundido se pueda recoger esta redacción, unánimemente aceptada, en evitación de ciertos abusos y consecuente inseguridad para los agentes afectos. Además, teniendo rango de Ley, tanto lo que debe ser el contenido del contrato, como las causas de extinción, en el artículo 20 de la Ley de producción de seguros, consideramos que este precepto debe mantener el mismo rango legal.

La enmienda 130, señor Presidente, señorías, la retiro.

En la enmienda 131 propongo añadir el siguiente epígrafe: «Los agentes afectos no representantes, en tanto no se les exija por disposición reglamentaria el título, acreditarán sus conocimientos mediante un certificado de suficiencia. Este mismo certificado deberán poseerlo los empleados de las entidades aseguradoras y de los agentes y corredores empresarios, para poder producir seguros».

En principio tengo que decir que quizá no tendría inconveniente en retirar este último párrafo que hace referencia a los empleados de entidades aseguradoras, siempre que se me aceptara lo que propongo en el primer párrafo y que, desde luego, entendemos que tiene una gran importancia. Creemos que esta enmienda supone una facultad al Gobierno para ir requiriendo a los agentes afectos el título, lo que se piensa hacer progresivamente en las capitales de provincia, según su importancia. Mientras tanto, se pedirá un certificado de suficiencia para cuya obtención el Reglamento, lógicamente,

puntualizará menores exigencias que para la obtención del título. De no concederse tal facultad al Gobierno, y siendo disposiciones con rango de Ley las que exigen el título, sólo a los agentes libres, hoy corredores de seguros y agentes representantes, entendemos será de muy dudosa legalidad la exigencia por vía reglamentaria del título o certificado de suficiencia a los demás agentes afectos.

Por otra parte, la presente Ley de ordenación del seguro privado que estamos debatiendo incurriría en un vacío jurídico, ya que en su artículo 40 se dice que existirá un registro de estos certificados de suficiencia, y se ha suprimido de ella el artículo que los establece, que sin duda debe ser de carácter menos sustantivo y menos reglamentario como antecedente necesario que la creación de un registro de tales certificados.

La enmienda 132 también la retiraría y, como decía con anterioridad, estoy convencido de que por parte del Grupo mayoritario que hoy sustenta al Gobierno se van a tomar en consideración estas enmiendas que nosotros hemos propuesto, porque, como he dicho, ellos las propusieron en su día y, además, estoy casi convencido de que efectivamente van a ser aceptadas, por lo que les doy las gracias ya desde ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra tiene la palabra el señor Ruiz Mendoza.

El señor RUIZ MENDOZA: Con la venia, señor Presidente. Muy breve, señores Senadores, brevísimo.

Los razonamientos de nuestro compañero Senador don José Ignacio Bajo Fanlo, del Grupo de Senadores Vascos, nos han convencido en cuanto a la enmienda número 128. Es admitida, totalmente admitida en sus términos.

También admitimos parcialmente la enmienda número 131 en los siguientes términos: «h) Los agentes afectos no representantes, en tanto no se les exija por disposición reglamentaria el título, acreditarán sus conocimientos mediante un certificado de suficiencia». El resto de la enmienda no se admite por parte del Grupo Socialista.

En cuanto a las restantes enmiendas, la número 129 no se admite por parte del Grupo, porque no hay razonamientos ni motivos suficientes para su admisión.

Está vigente la Ley del año 1969, reguladora de la producción de seguros, y también, como aquí se señala en el número 2 de la Disposición derogatoria, el Reglamento de la producción de seguros privados. Creemos que es materia que está ya prácticamente dentro de esta Ley del año 1969, comprendida en el Reglamento y entendemos, por tanto, que no procede incluir ahora en este proyecto de Ley de seguros privados la enmienda a la que antes me he referido, que no se acepta.

En cuanto a las enmiendas números 130 y 132, nada tengo que decir, porque han sido retiradas por el señor Bajo Fanlo.

Nada más y mi enhorabuena, señor Bajo Fanlo.

El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz Mendoza, por favor, ¿qué se acepta concretamente?

El señor RUIZ MENDOZA: La número 128 íntegra, que es una Disposición adicional.

El señor PRESIDENTE: Esa se votará aparte y se puede incluir. ¿Alguna más o no?

El señor RUIZ MENDOZA: La 131 parcialmente. Se acepta el primer párrafo de la enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Bajo Fanlo.

El señor BAJO FANLO: Señor Presidente, señorías, simplemente para volver a repetir mi agradecimiento al Grupo Socialista por la aceptación de las enmiendas; y, al mismo tiempo, sobre la enmienda 129, agradecerles también el reconocimiento que hacen de que nuestra propuesta, en cierto modo, puede que esté recogida dentro de la Ley actual de 1969 y del Reglamento. En cierto modo entendemos que es posible que en el nuevo Reglamento que se establezca —después de lo que aquí se ha manifestado— quede recogido con más claridad lo que nosotros pretendemos con nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor Bajo, ¿cuáles son las enmiendas que retiró?

El señor BAJO FANLO: Las enmiendas que he retirado son la 130 y la 132, y retiré también la 129 después de las manifestaciones hechas por el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura a la enmienda transaccional.

El señor SECRETARIO (Gaminde Alix): Dice así: «Los portavoces abajo firmantes, al amparo del artículo 125 del Reglamento, presentan la siguiente enmienda transaccional. A la Disposición adicional tercera, punto uno, añadir un nuevo epígrafe: h) Los agentes afectos no representantes, en tanto no se les exija por Disposición reglamentaria el título, acreditarán sus conocimientos mediante un certificado de suficiencia».

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar el párrafo 1.º de la Disposición adicional tercera que no tiene enmiendas, ya que han sido retiradas las presentadas por el señor Bajo.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

A continuación pregunto a la Cámara. La Presidencia propone que se vote por asentimiento la enmienda que

acaba de leer el señor Secretario. ¿Están de acuerdo SS. SS.? (Asentimiento.)

Queda incluida la enmienda como epigrafe h).

Votamos a continuación la enmienda número 128, del señor Bajo, que propone la adición de un apartado j).

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Entramos en el número 2 de esta Disposición transitoria, al que existe un voto particular del Grupo Parlamentario Cataluña al Senado, enmienda número 49.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 146; a favor, 26; en contra, 120.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 142; a favor, 138; en contra, tres; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos a continuación la Disposición derogatoria en su totalidad, y luego consultaré a la Cámara la aprobación de una adición a esta Disposición derogatoria.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Secretario que lea la enmienda transaccional.

El señor SECRETARIO (Gaminde Alix): Al amparo del artículo 125 del Reglamento de esta Cámara, los portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes proponen la siguiente enmienda al proyecto de Ley de ordenación del seguro privado; incluir en último lugar del número 2 de la Disposición derogatoria, figurando como vigente lo siguiente: «Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para el saneamiento del sector de seguros privados y para el reforzamiento del organismo de control». Y sigue la firma de los portavoces de los cinco Grupos Parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: La Presidencia propone a la Cámara que se apruebe por asentimiento. (Pausa.)

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas propuestas al Congreso, para que éste se pronuncie sobre las mismas antes de la sanción por parte de Su Majestad el Rey.

Señores Senadores, espero que aprovechando que no va a haber sesiones durante el mes de agosto, tengan ustedes algunos días de descanso, que bien se lo han ganado SS. SS.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cuarenta de la tarde.

Imprime RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.800 - 1961